CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2015

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

20ª SESIÓN

(Matinal)

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO DE 2016

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GUSTAVO BERNARDO RONDÓN FUDINAGA

—A las 09:55 h, se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas.

Siendo las 9 horas con 55 minutos del miércoles 18 de mayo del 2016, y con la asistencia seria, responsable, puntual de los congresistas en estricto orden de llegada Lourdes Alcorta, Heriberto Benítez, Mauricio Mulder, Héctor Becerril, Segundo Tapia, estuvo el congresistas Llatas, Santiago Gastañadui, Justiniano Apaza, Esther Saavedra, Martín Rivas, Yonhy Lescano, Luis Galarreta, Alejandro Aguinaga, Ana Jara, Ana María Solórzano, Josué Gutiérrez y Gustavo Rondón, con el *quorum* reglamentario se inicia la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Periodo Anual de Sesiones 2015-2016.

Señores congresistas, somete a su consideración el proyecto del Acta de la Décimo Novena Sesión Ordinaria, celebrada el miércoles 11 de mayo del 2016. Si no hubiera observaciones. Al voto. El Acta ha sido aprobada por unanimidad.

DESPACHO

El señor PRESIDENTE.— En los anexos A y D de la agenda remitida a los despachos parlamentarios se indica la sumilla de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión. Los mismos que están a disposición de los congresistas en la secretaria de nuestra comisión.

Pasamos a la sección Informes.

Informes

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que tuvieran a bien presentar algún informe, tienen el uso de la palabra.

Congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, informar que el congresista Josué Gutiérrez y quien habla pertenecemos a la Comisión Investigadora del tema Lava Jato, que está empezando a sesionar también en este momento; de manera que cuando se registra alguna ausencia en nuestra parte, será por ese tema, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Mauricio Mulder.

El congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor presidente, buenos días.

Hoy día se han cruzado una serie de citaciones a una serie de comisiones, creo que hay dos o tres colegas parlamentarios que también estamos en la Junta de Portavoces, se nos ha convocado a las 10 de la mañana para ver el tema del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional.

De tal manera que le pedimos que cuando se hagan las votaciones, nos pueda convocar para venir a votar, porque vamos a tener que ausentarnos; ya van a hacer más de las 10.

Entonces, le pediría que el personal que apoya a la comisión nos pueda convocar para hacer las votaciones correspondientes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Yonhy Lescano.

Damos la bienvenida al congresista Pedro Spadaro.

Estamos en sección Informes. ¿Si alguien tuviera a bien informar?

Pasamos a la sección Pedidos.

Pedidos

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que deseen efectuar algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra.

Congresista Ana Jara.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Gracias, señor presidente.

Por su intermedio mi saludo a mis colegas parlamentarios.

Presidente, he visto en el orden de prelación de los puntos de la agenda del día de hoy, que se va a llevar a votación el informe final del caso de los pañales.

Yo le pediría para los efectos del *quorum*, y también porque hoy tenemos, eso no significa que no vayamos a asistir a todas las sesiones que tomar decisiones por respecto a las votaciones que se darán en horas de la tarde.

Si usted tuviera a bien y si los colegas parlamentarios respaldan esta postura que usted en su condición de presidente de la comisión pueda modificar el orden de prelación y consignarlo como punto uno de la agenda después que se ventile el orden correlativo que se debe llevar en una sesión.

Porque entiendo que esta como punto número cinco. Quisiera que usted lo consignase antes, si lo tiene a bien.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Ana Jara.

Los primeros puntos que vamos... prácticamente solo requieren de un voto porque son informes mayores de producto de algunas audiencias públicas, un proyecto de ley que es de fácil entendimiento que es dar a las OCES la facultad de que en estos procesos en las instituciones que muchas veces presentan a los titulares del pliego, deben pasar, es un proyecto de la congresista Natalie Condori, deben pasar el comunicado al Ministerio Público para el

conocimiento y las acciones pertinentes. O sea, no es tampoco una cuestión de orden mayor.

Y saliendo de esos, en todo caso de esos puntos que son ligeros relativamente, podemos pasar al suyo, congresista, con todo gusto.

Algún otro pedido, por favor.

Congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor presidente, yo he formulado un pedido por escrito que se lo he dirigido a su presidencia, y hoy día quiero hacerlo de manera verbal para que se pueda invitar a la Comisión de Fiscalización a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en su calidad de presidenta de la organización política Fuerza Popular, candidata presidencial; y porque en los últimos días han aparecido una serie de informaciones comprometedoras con su partido político y con dirigentes de su organización que estarían vinculados con graves delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Presidente, yo envié la carta el día lunes, posterior a esa carta apareció una información que la DEA había señalado que la señora Fujimori no tenía ninguna investigación en giro.

Producto de ello, en varios medios de comunicación salieron diversos líderes de dicha organización a decir que ya no se justificaba la presencia de ella porque la DEA ya había señalado que ella no estaba comprendida.

La propia señora Fujimori dijo que este era un tema que ya no era razón para que pueda ser invitada.

Sin embargo, presidente, en las últimas horas la manera como la señora Fujimori ha blindado y protegido a su secretario general, de quien se ha conocido informaciones relacionadas a investigaciones que se están haciendo por lavado de activos aquí en el Perú, a cargo de la Procuraduría especializada en lavados de activos y a cargo del Ministerio Público.

Yo creo que con mayor razón hay méritos suficientes para que ella, en su calidad de Jefa del partido Fuerza Popular, pueda venir al Congreso a dar las explicaciones del caso.

Señor presidente, el secretario general que es el brazo derecho de la señora Keiko Fujimori, que aparece en todas las fotografías a su costado, que es a su vez el presidente del comité nacional de disciplina de Fuerza Popular, que es el que aparece en fotografías conversando con propietarios de empresas encuestadoras, que es el que presta inmuebles para que funcione los locales de Fuerza Popular, que presta vehículos para que se movilice la candidata o jefa del partido Fuerza Popular. La ligazón que existe entre ambos, obliga a que la jefa de dicho partido, tenga que venir a dar las explicaciones del caso.

Incluso, presidente, en conferencia de prensa el señor Ramírez, secretario general de esa organización, ha dicho que ha adquirido inmuebles en los Estados Unidos, y que cuando él solicitó un préstamo, los bancos del extranjero que hacen investigaciones se han dado cuenta que él no tenía ninguna investigación y que por eso le han entregado el préstamo.

Y que ese hecho demuestra que no hay ningún tipo de compromiso, ni vinculación con delito alguno, sin embargo, todos conocemos por historia, que en el caso de Fernando Zeballos, él también decía que la DEA no la investigaba, el señor Fernando Zeballos, tenía patrimonio, propiedades, vivía en los Estados Unidos, era residente de Estados Unidos, trabajaba en Estados Unidos, y hoy día ha terminado preso, condenado por lavado de activos y narcotráfico.

Entonces, el hecho de la DEA no tenga ninguna investigación, el hecho de que la DEA saque un comunicado y diga que la señora Keiko no es investigada, no excluye que ella, como jefa de un partido pueda venir acá a dar explicaciones, porque tiene en su entorno a personas comprometidas con lavado de activos.

Más aún si aspira a ser candidata a la presidencia de la república, y tiene a su secretario general al costado derecho de ella, que podría estar involucrado en narcotráfico, y encima su familia investigada. Y nosotros vamos a permanecer en silencio, señor presidente.

Vamos a tener, teniendo los antecedentes incluso de que en el año 2011, ha habido financiamiento económico de parte de personas procesadas de lavado de activos...

El señor PRESIDENTE.— Congresista Heriberto Benítez.

Veo que está usted sustentando lo que vamos hacer, por la anuencia y para conducir mejor la Mesa, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar el tema solicitado por usted a la Orden del Día, para que pueda usted explayarse.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, pero para entrar a la Orden del Día se va a votar, porque si se va a votar con rechazo, no se puede sustentar nada.

Acá, presidente, lo que hay que ver es que estamos ante un lavado de activos vinculado al narcotráfico, una candidata presidencial y el secretario general de un partido, y lo que hacen los representantes de ese partido es insultar, señor presidente.

Señor presidente, la propia jefa de Fuerza Popular...

El señor PRESIDENTE.— Vamos a leer el Reglamento, porque veo que están los ánimos un poco caldeados, así que por favor sírvase leer el Reglamento.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Buenos días, señores congresistas.

Es necesario recordar el artículo 61.º relativo a disciplina parlamentaria, literal b).

"Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier Congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del Presidente en materia de orden, éste lo reconviene. Si el Congresista persiste en su actitud, el Presidente ordena su salida de la Sala. Si no obedece, el Presidente suspende la sesión por quince minutos. Reabierta ésta, el Presidente reitera su pedido. Si el Congresista se allana, el Presidente da por concluido el incidente; de lo contrario, la Mesa Directiva propone al Pleno según la gravedad de la falta, la

sanción de suspensión a que se refiere el inciso c) del artículo 24 del presente Reglamento".

Ese es el contenido pertinente al reglamento, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— El congresista Díaz Dios, ha pedido...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, puedo continuar, todavía no he terminado.

El señor PRESIDENTE.— Ya lo que estamos más o menos acordando la Mesa Directiva, es que el tema pase a la Orden del Día, y en el Orden del Día nos explayaremos y votaremos.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Si va a pasar sin votación y me van a permitir ahí sustentarlo, no tengo ningún problema, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Perfecto.

Congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS ().— Gracias, presidente.

Efectivamente la Mesa Directiva plantea lo siguiente.

Pasar el pedido del señor Heriberto Benítez al Orden del Día y será en la Orden del Día en ese momento donde el señor sustentará, se harán los descargos, o la gente o los congresistas que estén en contra, y finalmente este someterá a votación.

Esto en aras de no cortar la agenda que ya está preparada para el día de hoy, señor presidente

El señor PRESIDENTE.— Entonces, pasa al Orden del Día. Y vamos a empezar con algunos temas que hemos presentado. (2)

Estamos en pedidos.

Congresista Saavedra, congresista Simon.

La señora SAAVEDRA VELA (GPDD).— Presidente, muy buenos días.

Saludar a todos acá presente.

Presidente, nuevamente reitero mi pedido, al respecto de que usted solicita nuevamente a la Mesa Directiva que de inmediato pase a ser debatido la Ley que regula la ejecución de obras públicas para administración directa, la 25330. Porque estamos a la expectativa de este proyecto, coordinando con la Contraloría, necesitamos, el pueblo pide, porque estamos formando y dentro de esta ley estamos formando los comités de vigilancia para poder seguir luchando contra la corrupción; y eso yo lo pido antes que termine, insistir y si la Mesa Directiva no hace caso, tendremos que traer a nuestros frentes de defensa, para que sean escuchados.

Ya venimos desde el año pasado, y eso es lo único que yo lo sugiero, presidente, y manejar la cordura acá. Y felicito a todos mis colegas que están acá, porque muchas veces la Comisión de Fiscalización es vacía, pero ahora de repente algo interesante les tiene acá para que estén presentes acá.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Saavedra.

Quiero decirle que ya personalmente lo hemos hecho, y lo hemos hecho por escrito, y el día de hoy que tenemos el Pleno, volveremos a insistir.

Si me parece que es un proyecto importante, este de modificación a lo que es administración obras por administración directa.

Congresista Simon, congresista Benítez y congresistas Alcorta.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, buenas días. Saludar a los señores congresistas.

Insistimos, presidente en el tema de Pomalca, parece que en este país la ley no significa nada y todo el mundo hace lo que le da la gana.

El Fonafe, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, cuenta con tres puntos, 63% de acciones de Pomalca, o sea, primero el Estado, sin embargo, y tal como nos ha hecho conocer el mismo Fonafe, porque estamos investigando lo que pasa en Pomalca.

Fonafe pidió conocer la información de la empresa y solicitaron que se convoque a una Junta General de Accionistas, esta Junta General de Accionistas se programó para el 25 de enero del 2011, y se suspendió de manera arbitraria, sin participación de los representantes de Fonafe, acaban de llevar a cabo una reunión eligiendo un nuevo directorio de manera ilegal.

Se han iniciado acciones legales contra la administración de Pomalca y la empresa mediante una medida cautelar impide a Fonafe ejercer su derecho político como accionista.

Presidente, lo que está pasando en Pomalca es un crimen, se botan trabajadores, no se informa de las acciones al Estado, a pesar que el Estado tiene acciones, a los trabajadores se les ha engañado, se dio protección patrimonial, tierra de nadie. O sea, así como se cometen todos los días crímenes en este país, algunas empresas están haciendo lo que les da la gana.

Por lo tanto, yo le invoco, porque esta es la segunda vez que intervengo sobre el tema Pomalca, para que se pueda convocar a Fonafe para que explique exactamente qué está pasando en Pomalca, por qué no están informando con respecto a las acciones...

Me está pidiendo interrupción el congresista Becerril.

El señor PRESIDENTE.— Interrupción primera del congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GFPF).— Gracias, presidente.

Preocupado también obviamente por el tema de Pomalca.

Ahí tiene que investigarse, por qué con una medida cautelar para 30 días, para que entraron a administrar a esa empresa, ya tienen 12 años. Es una burla al Poder Judicial, es una burla a los trabajadores.

Es cierto que en algún momento acá en el Congreso se han debatido leyes a favor del grupo empresarial, y muchos de ellos en contra de los trabajadores.

Es también creo que va siendo hora de que los trabajadores de Pomalca, conozcan cual ha sido la posición y la votación de los congresistas, sobre todo de Lambayeque, en los temas que a los trabajadores los han perjudicado.

Yo creo que acá ese 3% de accionariado que tiene el Estado, si ayuda a que podamos intervenir y ver qué está pasando en esta empresa.

Es cierto, últimamente hay muchos trabajadores que viene siendo despedidos, entonces, creo yo que ellos no pueden estar desamparados a su suerte, creo que debemos tomar acciones sobre ese tema.

Gracias, presidente; gracias colega Yehude.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Becerril.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, yo aterrizo en mi pedido.

Que se invite a Fonafe, que se invite a un dirigente de los trabajadores, y se invite a un empresario, a alguien de la empresa para que la cosa podamos escuchar a las tres partes con carácter de urgencia para que pueda informar a esta comisión, qué está pasando en Pomalca, y de esa manera creo que habremos cumplido como comisión.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Simon.

Congresista Benítez, prosigue la congresista Alcorta.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, yo quisiera formular un pedido para que a la hora que lleguemos a la Orden del Día, el primer tema que se pueda tocar es el pedido para que se invite a la señora Keiko Fujimori.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, presidente.

Yo quisiera solicitar a través de la Mesa, si ustedes pueden solicitar a la comisión que investigó el caso de Orellana Rengifo, la situación que tuvo acá el señor Gilbert Violeta, que estuvo vinculado y está vinculado al tema de Orellana Rengifo.

Yo le agradeceré porque ha habido varios miembros de esta comisión, que han sido parte de la comisión de Orellana Rengifo, solicitaría me alcancen el informe del señor Gilbert Violeta que está vinculado al tema de Orellana Rengifo.

Gracias. Perdón, una interrupción el señor.

El señor PRESIDENTE.— Interrupción el congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPPF).— Sobre el tema, presidente.

En el borrador inicial del informe del caso Orellana Rengifo, si figuraba el señor Gilbert Violeta, no obstante en el informe final, sospechosamente ya no aparece, y más bien gente vinculada a esta investigación terminan postulando para el partido Peruanos por el cambio, incluso un asesor principal de esa comisión, termina postulando y también el presidente de la comisión, también terminan

postulando para Peruanos Por el Cambio, y que en el borrador que estaba el señor Gilbert Violeta, en el informe final ya no aparece.

Me sumo al pedido de la colega Lourdes Alcorta, que se investigue, presente, por qué en el borrador si estaba Gilbert Violeta, y en el informe final ya no aparece, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Becerril.

Completa algo y ahí queda.

Pasamos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

El señor PRESIDENTE.— Como habíamos ya dicho, son temas tres de ellos que son prácticamente de votación.

Vamos a exponer el primer tema de la agenda, con relación al proyecto dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3697, 3950 y 4011, sobre modificación de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de Contraloría General de la República para efectivizar acciones de control.

Tiene la palabra nuestra asesora de la comisión.

Adelante doctora Moscoso.

La ASESORA.— Señor presidente, vamos a retomar el proyecto referido a los Proyectos de Ley 3697, 3950 y 4011, que fue debatido en la sesión de la comisión del 23 de noviembre de 2015.

En esta sesión se recibieron los aportes de los señores congresistas respecto sobre todo del segundo tema que se planteó en este proyecto de dictamen referido a la presentación del señor Contralor de la República ante el Pleno del Congreso de la República, los demás temas no fueron objeto de ninguna observación.

Por lo tanto, en ese estado retomamos el tema, con un breve *recordaris*, respecto de los otros puntos que fueron presentados en el proyecto de dictamen.

En cuanto al proyecto que plantea la modificación del artículo 11 y del artículo 19, de la Ley del Sistema Nacional de Control, y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, tenemos que decir lo siguiente: no se ha modificado en principio lo que se propuso en ese entonces, y este proyecto propone que el jefe de OCE, de las municipalidades, básicamente gobiernos regionales, lo que tiene que hacer cuando su informe de control alcanzado, tanto al titular de la entidad, cuanto al procurador no es objeto de ninguna medida. Entonces, mediante este proyecto, se propone facultarlo para que lo comunique adicionalmente al Ministerio Público, para que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, analice y decida y formula denuncia o no.

Queremos hacer hincapié en que en este aspecto debe tenerse en cuenta que el Jefe de OSCE no estaría formulando denuncias, sino simplemente cumpliendo con poner en conocimiento este informe a el Ministerio Público.

Por lo tanto, la facultad de denunciar queda en manos del titular de la entidad y del procurador público.

Adicionalmente, este proyecto propone que se establezca un plazo para que el titular de la entidad pueda cumplir con su obligación de denunciar en estos casos en que los informes de control presentan responsabilidades de carácter penal.

La ley actualmente señala que lo hará inmediatamente, pero este término resulta ser indeterminado porque los titulares normalmente no cumplen con este deber.

En consecuencia, el proyecto de ley propone darles 15 días hábiles para que se cumpla con la posibilidad de tener un parámetro de control a estas obligaciones que no se están cumpliendo a la fecha.

El segundo tema, que plantea el proyecto de ley, el primer proyecto de ley es la modificación del artículo 19.

A la fecha esta ley concede a la Contraloría General de la República la posibilidad de que un 25% de su personal sea nombrado directamente por la Contraloría sin concurso público, la propuesta es que todos sean nombrados por concurso público.

Sin embargo, hecha la investigación sobre la razón de ser de este 25%, excluido del concurso público, se determinó que al momento que se vio la ley, el Congreso deliberó que era necesario concederle a la Contraloría un margen de manejo para situaciones imprevistas, y no esperar en estas circunstancias que se llevara a cabo todavía un concurso público.

Creemos que esta situación a la fecha como vemos y como el señor Contralor ha informado, no ha cambiado mucho en cuanto a la falta todavía de jefes de OCES de la Contraloría. En consecuencia, siendo esta la realidad, es necesario mantener este margen, no obstante, es verdad que hay que cautelar que este personal que es directamente nombrado por Contraloría, cumpla el perfil que se requiere y que no vaya a hacer casos en que se nombre personal que no cumple con los requerimientos del puesto.

Por ello, se ha propuesto especificar que sea profesional especializado y con experiencia en auditoría gubernamental, es decir, no necesariamente puede ingresar una persona que no tenga estos requisitos; lo que ahora no se sabe si se cumple o no.

Adicionalmente, los otros proyectos plantearon el tema de la presentación del señor Contralor ya no en la comisión, sino ante el Pleno.

Respecto de esto, en la sesión pasada que se debatió el tema, se planteó que no era pertinente que el Contralor se presentara ante el Pleno del Congreso, y que algunos congresistas plantearon que esto merecería una reforma constitucional.

Nosotros consideramos estas opiniones, y además agregamos que así como el Defensor del Pueblo por mandato de la Constitución se presenta ante el Pleno del Congreso y el reglamento del Congreso, ha establecido en su artículo 95, un procedimiento para la presentación del Defensor del Pueblo ante el Pleno, una propuesta de esta naturaleza requería que el reglamento sea el que regule esta presentación del señor Contralor ante el Pleno.

Por esta razón, nosotros consideramos que en este extremo, este proyecto no puede ser acogido por que requeriría más bien en vez

de plantearse, una modificación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, una modificación al reglamento del Congreso.

Porque no puede ser que estando ya establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, la presentación al Congreso, no a la Comisión de Fiscalización del señor Contralor volvamos sobre el tema, cuando lo que falta es regular la presentación ante el Pleno del Congreso y eso no se hace obviamente en la Ley del Sistema Nacional de Control, sino en el Reglamento del Congreso.

Finalmente, se está agregando una atribución más al señor Contralor, agregando un literal o) al artículo 32.º de la Ley Orgánica. **(3)** En el sentido que el señor Contralor y todo el sistema durante las auditorías que realizan, tiene la oportunidad de detectar vacíos en diferentes leyes, que son el caldo de cultivo de algunas acciones de corrupción.

Esta información a la fecha no se aprovecha, por consiguiente, es pertinente que el Contralor pueda informar trimestralmente de temas que podían ser objetos de proyectos de ley y de modificaciones legislativas, que no les puede plantear él como Contralor, porque sus facultades están para plantear temas relativos a su competencia.

En consecuencia, este informe simplemente se propone que sea colgado en la página Web del Congreso para que todos aquellos que tengan intereses en estos temas, en promover legislación sobre la materia, puedan asumir esta información y proceder a presentar los proyectos de ley respectivos.

Eso es todo, señor presidente, en esencia de lo que está proponiendo en este proyecto de dictamen.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, doctora Moscoso.

Damos la bienvenida a los congresistas Agustín Molina, Rubén Coa y Karina Beteta.

Si algún congresista quiere formular alguna apreciación sobre el proyecto de ley, sino para ir al voto.

Congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, yo quiero plantear una cuestión de orden para que usted en cumplimiento del Reglamento nos pueda informar a la comisión, cuál es la relación de temas que se van a ver el día de hoy. Porque hay un pedido de la congresista Ana Jara para que se dé prioridad sobre su informe, hay un pedido que he hecho yo para que se dé prioridad para ver la invitación de la señora Keiko Fujimori, y estamos empezando a discutir proyectos de ley que estaban en la agenda y que podemos terminar sin *quorum* y nunca se van a ver los casos.

Yo quisiera que nos informe la relación de temas que se van a tocar el día de hoy para estar pendiente, existiendo dos pedidos de dos congresistas para que se dé prioridad al tema de la invitación de Keiko Fujimori, y al tema del informe de la congresista Ana Jara.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez, no sé si no le haya llegado a usted la agenda de la comisión.

Y no sé si usted haya escuchado la respuesta que le di a la congresista Ana Jara, que gentilmente ella ha aceptado. O sea, están en la Orden del Día, la estamos respetando, en aras de que indudablemente cada tema es importante, por el contrario, vamos a respetar ese orden.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, eso quiere decir que lo de Keiko Fujimori, no se va a ver el día de hoy.

El señor PRESIDENTE.— Se va ver ya...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Porque si usted tiene cinco temas adelante, en qué momento se va haber.

Yo le hecho el pedido para que se vea, y usted lo ha pasado a la Orden del Día y ha pedido que se vea hoy.

Yo quisiera que nos diga, en qué momento se va a ver hoy el tema. Yo he pedido que sea el primero antes que este debate se vea lo de Keiko Fujimori.

Es narcotráfico, es lavado de activos, eso es un tema importante, y no se quiere tocar, señor, el tema.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez, ya lo hemos pasado, por favor...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Pero el orden que se diga que...

Congresista Alcorta, bien, vamos a ir al voto, ya está la agenda elaborada, ya se ha pasado el tema a orden del día y vamos para adelante.

Por favor quienes estén de acuerdo el...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, se ha planteado una cuestión de orden, sométala al voto, señor.

El señor PRESIDENTE.— Estamos en votación...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Tiene que verse el tema señor presidente.

Usted va a seguir, estamos planteando una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez, si usted lee el Reglamento y debe de conocerlo mejor que yo, el presidente ya ha planeado toda la semana el Orden del Día, estamos aceptando su pedido, ha pasado a la Orden del Día, va a haberse como último punto, y obviamente ahora estamos desarrollando la agenda.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, con todo respeto, se va a haber el día de hoy de todas maneras...

El señor PRESIDENTE.— Si, se va a ver el día de hoy su pedido, congresista.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Después no venga que no hay *quorum*, ni nada, hoy día se va a ver.

El señor PRESIDENTE.— Que no se preocupe que lo vemos.

Congresista Beteta, si hay algo que exponer.

La señora BETETA RUBÍN (GPDF).— Gracias, presidente.

Usted es el que preside esta comisión, y el señor Benítez que no crea que está en la centralita, que puede pedir a la hora que le dé la gana, tocar un tema, presidente.

Acá hay que ser respetuoso, hay una agenda y hay que seguir esa agenda.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Okay.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Presidente, permítame.

El señor PRESIDENTE.— Pidió el congresista Galarreta y después usted.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidente, con todo respeto le voy a pedir que usted presida esta sesión, o sea, el señor que hace su show, repite 20 veces que la DEA y la droga, además este señor que esta acá, porque debía estar preso, lo ha salvado un voto, el voto de su partido, porque si no usted estaría preso con la centralita, así que lo que no voy a aceptar, es que al señor le dé tribuna para que siga hablando cosas que no son reales.

Si este individuo lo que quiere es hacer show, hay que hacerlo fuera en la sesión, con él.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez, por favor. Invoco a vuestro alturado a sus consideraciones respectivas como congresistas, vamos a pasar al voto.

Congresista Benítez la última intervención.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Yo lo que quiero es, yo quiero rechazar las versiones que dicen aquí algunos colegas que se amparan en que han sido reelectos y creen que el pueblo los va a proteger toda la vida, señor.

Aquí no se puede ofender a nadie, ni se puede insultar, aquí hay un pedido formal para que venga una candidata...

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, quienes están de acuerdo con el proyecto de ley expuesto, sírvanse levantar la mano. A favor, congresistas Saavedra, Díaz Dios, Yehude Simon, Tapia, Becerril, Beteta, Aguinaga, Galarreta, Ana Jara. Quienes se abstengan, Congresista Solórzano. Quienes estén en contra. Okay. Ha sido aprobado por mayoría.

Siguiente punto.

Proyecto del informe final de la investigación sobre presuntos actos irregulares, en los que se la Empresa de Transportes Turistas Machupicchu, Consettur. Con el objeto de obtener la concesión de la ruta Hiram Bingham, por un periodo de 30 años para realizar transporte de pasajeros desde el pueblo de Machu Picchu.

Sírvase leer señor asesor, doctor Soto.

El ASESOR.— Señor presidente, señores congresistas, buenos días.

El inicio de la presente investigación guarda relación directa con las denuncias presentadas en la audiencia pública descentralizada

de la Comisión de Fiscalización y Contraloría llevada a cabo en la ciudad del Cusco el 27 de febrero del 2015.

Esta denuncia fue presentadas por dos titulares, la Asociación de defensa y turismo del Cusco y la Inversión de Consorcio Machu Picchu Santuario, Consorcio MAS.

Los puntos que se vio en el informe son:

1.- Sobre la concesión de 30 años de la ruta Aguas Calientes, Puente ruinas, Ciudadela Inca.

Existe un contrato de concesión de fecha 4 de setiembre del 95, firmado por el alcalde de Machu Picchu, don Guillermo Cusi Huntana y don Raúl Sánchez Soto, presidente del directorio de Consettur Machupicchu SAC.

En donde se otorgó la concesión de la ruta por un periodo de 30 años, contrato que actualmente viene ejecutándose por ambas partes.

Sobre los hechos denunciados, la comisión concluye que este contrato fue materia de un proceso de reconocimiento hecho en la vía judicial, en donde recayó una resolución judicial con calidad de cosa juzgada.

Conforme a lo expuesto en el análisis del informe, motivo por el cual la comisión de encuentra imposibilitado de emitir pronunciamiento alguno.

2.- Sobre la constitución de un monopolio legal y natural, el Consorcio empresa de Transportes Machupicchu SAC. cerrada, es la única empresa que ha sido legalmente autorizada desde el año 95, a prestar los servicios de transporte de pasajeros en la ruta Aguas Calientes, Puente ruinas, Ciudadela Inca Machu Picchu. Subida y bajada. Cubriendo el 100% del servicio por inexistencia de otras empresas que brinden por la naturaleza de la concesión.

De modo que no existe competidores de la ruta, materializando un monopolio natural al haberse configurado dicha sesión de uso por ley. Monopolio legal y natural que no está proscrito por la Constitución, ni por la ley.

Sobre la clasificación de la vía con ruta vecinal. La comisión llega a la conclusión que no existe irregular clasificación de la vía como ruta vecinal, ya que no puede considerarse ruta nacional ni turística a la que se le vincula la concesión, debida a la naturaleza de la ruta, según se ha realizado la concesión y según lo ha establecido por el Tribunal Fiscal en la resolución que obra en autos.

Sobre el aumento excesivo de las tarifas por parte de Consettur. Sobre este caso, la doctrina nacional permite a través de la libertad de empresa, que es un derecho constitucionalmente aceptado, que las empresas pudieran regular el precio de los servicios que ofrece, máxime si el parámetro natural al incremento de precios lo impone el propio mercado.

Sin embargo, tratándose de una empresa que viene a constituir un monopolio legal y natural por las características mencionadas, la comisión considera que se deba iniciar un procedimiento para

investigar un presunto abuso de posición dominante por parte de la Empresa Consettur. No siendo necesario la constitución de un órgano regulador de la ruta, tal y como lo propone los denunciantes.

Sobre los ingresos percibidos por la municipalidad de Machu Picchu y la municipalidad provincial de Urubamba por parte del Consettur, la comisión ha llegado a la conclusión que ambas municipalidades perciben ingresos entregados por parte de la empresa Consettur, ingresos que tienen como origen el contrato de concesión tratado en la primera conclusión de la presente investigación. Los cuales están destinados para la realización de obras en bienestar de la población.

Sin embargo, existen serias dudas sobre el uso de estos recursos, motivo por el cual la Contraloría deberá encargarse, iniciar una acción de control necesario para salvaguardar el uso de estos bienes.

Sobre el tema de la maestranza, la comisión ha llegado a la conclusión que no es posible determinar ningún tipo de responsabilidad, indicios en este caso.

Recomendaciones:

Primera, al Indecopi para que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación sobre el presunto acto que constituya abuso de posición dominante por la empresa Consettur, con respecto al incremento de los pasajes en la ruta.

Segunda, la Contraloría para que inicie las acciones de control respectivas en la municipalidad de Urubamba, y la distrital de Machu Picchu, con relación a las transferencias que realiza por cualquier concepto Consettur, como parte de la concesión.

Tercera, finalmente a Sernanp remitir copia del presente informe de acuerdo a la naturaleza de sus competencias, a efectos de que tome las acciones necesarias de cautela de la carretera, que es parte de la ruta concesionaria.

Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, doctor Soto.

Al voto, ni no hubiere alguna opinión. Congresista Rubén Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente, muchas gracias.

Yo tengo una opinión particular respecto a este tema, conocemos el asunto y debo señalar a pesar de que seguramente con nuestra votación no vamos a cambiar la orientación de las recomendaciones.

Yo lamento respetuosamente, presidente, y que no se haya investigado adecuadamente este tema.

Este es un tema de amplísima preocupación en la región del Cusco, es un tema que conoce toda la ciudad del Cusco, todos los actores vinculados, sobre todo a esta ruta que une la ciudadela de Machu Picchu con la ciudadela Inca. Es una historia de muchas décadas, en la cual se han destinado tramites tanto en la vía judicial, como en Indecopi, la historia se resume como seguramente usted conoce a como un contrato inicial que estaba suscrito para tres años, luego se convierte en un contrato permanente de 30 años, de una vía monopolizada altamente rentable con las tarifas más altas

del mundo entre la ciudad de Aguas Calientes, Puente ruinas, Ciudadela Inca de Machu Picchu, subida y bajada.

Y aquí han habido muchas irregularidades, yo no estoy de acuerdo en que una de las recomendaciones sea que porque esto entre la vía judicial, tenga la condición de cosa juzgada. Este Parlamento no pueda pronunciarse.

Nosotros en su momento hemos solicitado, hemos invocado a que con la objetividad del caso, esta comisión investigue las implicancias de carácter político, porque esto compromete a varios alcaldes. Esto compromete a funcionarios, y en términos generales, la recomendación acá es que no pasa nada.

Yo no estoy de acuerdo, ese es mi posición; y la ciudad del Cusco está atenta a este tema. Yo sugiero, recomiendo, que estos temas tan complicados y sensibles, vuelvan a la comisión, ameriten un mejor estudio, y no genere una controversia que con seguridad va a generar en la opinión pública regional del Cusco.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Bien, justamente esto de la cosa juzgada, nosotros hemos traído algunos representantes con relación a este tema, hay cuestiones de judicializadas que obviamente como bien lo dice el congresista Coa, delicadas, pero que están en esa vía.

Más bien nosotros tratando de cumplir como Congreso, como institución, este informe obedece a un viaje que hizo la comisión presidida por el congresista Wong al Cusco, y lo que se está llegando son recomendaciones al Indecopi, para ver lo de la posición dominante, a Contraloría, como que es su deber acciones de control, y al Sernanp, que tiene que ver con acciones necesarias en la cautela de la carretera.

Sé que el tema es complejo, pero creo que como Congreso, por lo menos no hemos dejado el tema en suspensión o latente, y creo que estas por lo menos, estas instituciones pueden empezar a trabajar. Y creo que queda en los colegas representantes del Cusco, para que esto siga para adelante si es que así lo amerita como dignos representantes.

Creo que no vamos ya sino al voto. Si es al respecto, congresista Saavedra, y vamos al voto.

La señora SAAVEDRA VELA (GPDD).— Hay puntos, presidente...

El señor PRESIDENTE.— Damos la bienvenida al congresista Juan Carlos Eguren. (4)

La señora SAAVEDRA VELA (GPDD).— Para poder dejar, por lo menos usted como presidente adhiérase a la recomendación la preocupación.

Yo tengo unas preguntas, porque no me quedó claro todo de este presupuesto de esta gran obra que tiene el Cusco, decir que Cosituc no paga IGV, pues se acogió a una Ley de Transporte Público que lo exonera del pago. Desde ahí empezamos mal.

Otro, ¿cuántos son los ingresos?, yo quisiera eso, señor Presidente, que usted nos ayude, ¿cuántos son los ingresos que percibe Cosituc por ese servicio de modalidad en la ciudadela de

Machu Picchu? ¿Cómo es posible que recién se advierta de esta irregularidad y ya haya permitido —yo me pregunto—, laborar a dicha empresa al margen que señala la ley?

Y otro, ¿cuánto dinero percibe la municipalidad de Aguas Calientes?, y ¿cuál es el destino de ese dinero.

Y mi última pregunta: ¿quién supervisa a Consituc?, ¿quien supervisa el dinero que se invierte en este lugar, en esta región?

Entonces, eso, señor Presidente, yo le pido. Aunque estoy revisando todo hay dudas respecto a este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— De lo que se trata justamente, el sentir y el alma, congresista Saavedra, es justo ya responder como Congreso.

Es verdad que el problema, como lo ha dicho el congresista Coa, es mucho más allá, hay ya cuestiones judicializadas y creo que en ese sentido... Por eso las recomendaciones que hemos dado son para que vayamos aterrizando algunas cosas con Contraloría, con Indecopi, con el Sernanp.

Perfecto.

En todo caso, vamos al voto.

Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. A favor congresistas Díaz Dios, Becerril, Tapia...

No, estamos para aprobar el informe, es un informe con tres recomendaciones.

El señor .— Nosotros lo negamos.

El señor PRESIDENTE.— Okay. Ya.

Congresistas Galarreta y Rondón. Cinco votos a favor. En abstención. Congresistas Saavedra, Solórzano, Gastañadui, Benítez, Jara. En contra.

El señor DÍAZ DIOS ().— No, en abstención.

El señor PRESIDENTE.— En abstención. Congresista...

El señor DÍAZ DIOS ().— Cambio a abstención yo, por favor.

El señor PRESIDENTE.— Ya. En todo caso...

En contra. Congresista Coa. Ya, ha sido aprobado por mayoría.

El señor DÍAZ DIOS ().— ¿Me cambiaste a abstención a mí, por favor?

El señor PRESIDENTE.— Sí. En abstención. Congresista Díaz Dios.

Señores congresistas, pido autorización para ejecutar el acuerdo adoptado hasta este momento, sin esperar el trámite de aprobación del Acta.

A favor. En contra. Ha sido la dispensa aprobada.

Tercer tema rápido, igual que los dos primeros, vamos a tocar el informe técnico sobre problemática jurídica del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco, denominación Cosituc.

La doctora Moscoso sucintamente va a leer las conclusiones y recomendaciones de este informe.

Asesora.

La ASESORA.— Señores congresistas, brevemente quiero indicar cuál es el origen de este informe.

El año pasado, con la presencia del señor congresista Wong Pujada, en la ciudad del Cusco, se llevó a cabo una audiencia en la que un regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco denunció irregularidades en el manejo del boleto turístico del Cusco a raíz de una situación poco clara en cuanto a su naturaleza jurídica, y que debía además tenerse en cuenta que la Ley del Boleto Turístico, que había merecido, después de cinco años de promulgada, la emisión de un reglamento, a su entender a través de este reglamento se había desnaturalizado la ley agudizando los problemas administrativos y financieros del manejo del Cosituc.

Sobre ... (falla de grabación)... que el Cosituc se constituyó, en el año 1978, bajo el *nomen iuris* de comité cuando el Código Civil no reconocía todavía esta figura. En consecuencia, simplemente tendría que asumirse que el Cosituc es una entidad que está en el marco del derecho convencional, pero que recién puede ser acogida jurídicamente en el nuevo Código Civil de 1984.

En base a esta situación, el Cosituc ha venido funcionando hasta la emisión de la Ley del Boleto Turístico en esas condiciones, como una asociación de funcionarios públicos que decidieron organizarse para cobrar solo mediante un boleto todo el recorrido turístico de la provincia del Cusco.

Con la dación de la Ley del Boleto Turístico se rompió el esquema convencional que regía el funcionamiento del Cosituc, donde se aportaba para la operatividad del boleto turístico los recursos necesarios por parte de los que integraban este comité. Y, en consecuencia, desde ese punto de vista hasta ese entonces, el manejo financiero de las operaciones del Cosituc no tenía la exigencia de que el Cosituc contara con personería jurídica para poder girar cheques, para pagar impuestos. No se tenía ese problema, en absoluto.

Con la dación de la ley lo que sucede es que la ley afirma que el Cosituc va a ser el que administre el boleto turístico pero por encargo de la Municipalidad, a quien se le otorga la administración del boleto turístico.

En ese entonces, la municipalidad empezó a promover una serie de modificaciones al acuerdo que constituyó el Cosituc desnaturalizándose este ámbito de simplemente cobro del boleto turístico y repartición del boleto turístico asignándole tareas para que haga compra de inmuebles, para que, además, se dedique a comprar seguros para los turistas y haga otro tipo de obras.

Esta situación puso al Cosituc en una encrucijada jurídica, porque al no tener personería jurídica no sabía si hacer todas estas tareas que se le habían encomendado como persona de derecho privado, es decir, rigiéndose solamente por el Código Civil, y había otros que planteaban que debía seguirse la ley de contrataciones del Estado.

En consecuencia esta situación se agudizó con el paso del tiempo, hasta que el año 2011, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo emite el reglamento señalando que la naturaleza jurídica del Cosituc era la de un comité y que el Cosituc debía regirse por el artículo 130 del Código Civil. Esto despertó mayores inquietudes en la ciudadanía del Cusco, porque entendía que los recursos captados por el boleto turístico eran recursos públicos y que no podían ser manejados por leyes del derecho privado.

Hecho el análisis en este informe se ha determinado que, efectivamente, el Cosituc a la fecha, en el marco de la organización del Estado, no puede estar asumido porque los organismos públicos no tienen las características del Cosituc. Pero tampoco el Cosituc cumple las características que señala el Código Civil para un comité, en consecuencia, solamente podemos asumir que está en el marco del derecho convencional.

No obstante, es necesario señalar que el Cosituc puede seguir funcionando, como lo ha venido haciendo hasta el año 2007, siempre y cuando se vuelva a sus orígenes. Es decir, que simplemente sea un órgano recaudador y distribuidor de los ingresos del boleto turístico, pero que no se dedique a asumir obligaciones que son competencia de los entes que conforman el boleto turístico.

Por ejemplo, ver por la seguridad de los turistas es competencia de la policía, construir baños públicos, como se le asignó, es competencia de la municipalidad, en consecuencia, en este largo proceso se ha visto que han empujado al Cosituc a hacer cosas que eran de competencia de los entes que conformaban el Cosituc. No se entiende entonces para qué recibían estos entes, como señalaba la ley, los porcentajes que se les había asignado para cumplir estas funciones en pro del turismo.

Por lo tanto, se propone en este informe que el Cosituc funcione como originalmente fuera concebido y que si se quiere abordar otras tareas se transforme el Cosituc, previo análisis, en una empresa pública, que es la única alternativa que quedaría dentro del marco de las instituciones que alberga el Poder Ejecutivo y toda la organización estatal del Estado, pero que esta empresa que se constituya no sirva para realizar estas tareas que se le han estado asignando al Cosituc, porque son de competencia de las entidades que conforman el Cosituc.

Finalmente, queremos señalar la inquietud que los señores regidores planteaban, de que se discutía sobre la naturaleza jurídica de los aportes o de los recursos que se reciben a raíz del boleto turístico, señalar claramente que son recursos públicos y que cumplen la característica de una tasa.

Con respecto a la opinión entonces que se brindó, en el año 2010, por el Ministerio de Cultura, en el sentido que es un requisito para hacer tasa, que exista su mención en un TUPA, debemos decir que el Código Tributario es el que constituye la naturaleza de estos ingresos y no un TUPA.

Por consiguiente, señor Presidente, consideramos que esto permitirá aclarar a la ciudad del Cusco en qué situación se encuentra esta institución y cómo sí se puede seguir trabajando y

aportando al circuito turístico que contempla el boleto turístico del Cusco.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, doctora Moscoso.

¿Si alguien tuviera a bien algún análisis o alguna recomendación?
Congresista Rubén Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— De manera breve, señor Presidente.

Centralmente estamos de acuerdo con estas recomendaciones, esto es más coherente que el tema anterior de la concesión de la ruta de Machu Picchu. Vuelvo a señalar mi molestia, señor Presidente, creo que nos estamos equivocando. Pero, en fin, será la opinión pública la que finalmente juzgue.

Este tema, señor Presidente, yo sugiero que además se pueda elevar una recomendación al Ministerio Público, a efecto de que se inicie un proceso investigador con mayor criterio, porque la historia concreta, como bien se ha referido anteriormente, señor Presidente, es que acá se ha desnaturalizado la composición de una entidad que ha sido creada para administrar fondos públicos provenientes de boleto turístico, que no son pocos, son ingresos millonarios de manera anual, son fondos públicos.

Era un comité inicialmente integrado por las municipalidades comprendidas en todo este anillo que está en el Valle Sagrado de los Incas, vinculados al patrimonio arqueológico cultural, más la Municipalidad Provincial del Cusco y lo que entonces era el INC, ahora Ministerio de Cultura. Por una serie de artimañas, de criterios vedados, arbitrarios, ilegales, se le ha dotado al final de una característica, como ha sido señalado, prácticamente lo han convertido en una entidad privada, han hecho dispendio de fondos, y esto saltó cuando se quiso comprar y adquirieron, finalmente, un inmueble por más de cuatro millones de dólares y ahora quieren quedarse determinados privados con este fondo, señor Presidente.

Eso es lo preocupante, es decir, son fondos públicos pertenecientes a los municipios, está bien la naturaleza, pero que después un grupo de vivos, en este caso hay un exgerente que ha pretendido distorsionar todo este tema.

Le informo, entonces, con esta recomendación estamos de acuerdo con las sugerencias y las conclusiones derivadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Rubén Coa.

Entonces, vamos a agregar esta recomendación que usted sugiere al Ministerio Público. Gracias por esa contribución.

Quienes estén de acuerdo.

Al voto, por favor.

A favor. Congresistas Ana Jara, Benítez, Coa, Gastañadui, Solórzano, Rivas, Saavedra.

¿Díaz Dios?

El señor DÍAZ DIOS ().— Abstención.

Congresista Yehude Simon a favor, congresista Beteta. (5)

Congresistas que se abstengan. Congresista Díaz Dios.

A favor Becerril, a favor Segundo Tapia, congresista Aguinaga a favor también. Bien, ha sido aprobado por mayoría.

Pasamos al cuarto punto de agenda, el cual es el Proyecto de Informe Final de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la asignación presupuestal de cincuenta millones asignados al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la adquisición y distribución de pañales y otros adquiridos en el año 2013.

Vamos a solicitar a nuestro asesor, el doctor Soto, para que dé lectura a la exposición respectiva.

Adelante.

Damos la bienvenida al congresista Javier Velásquez Quesquén.

EL ASESOR.— Muchas gracias, señor Presidente.

En la presente investigación se ha tenido los siguientes objetivos:

Objetivo General

Evaluar las presuntas irregularidades en la asignación presupuestal de 50 millones de nuevos soles asignados al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la actividad apoyo social a las poblaciones vulnerables asignadas en el ejercicio fiscal 2013, así como las presuntas irregularidades en la adquisición, distribución de los pañales adquiridos por el Ministerio de la Mujer en el año 2013.

Los objetivos específicos fueron:

Evaluar la asignación presupuestal de estos cincuenta millones.

Determinar los presuntos actos irregulares en el proceso de adquisición, así como también el proceso de almacenamiento en el proceso de distribución, y determinar la existencia o no de presuntas responsabilidades en los funcionarios del Ministerio de la Mujer.

Análisis de los Hechos

El Pleno del Congreso de la República, a propuesta del Presidente de la comisión para el período 2012-2013, consideró un incremento de cincuenta millones de nuevos soles al presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, medida que fue aprobada en la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, propuesta que se concretó en virtud del pedido de la exministra Ana Jara Velásquez, efectuado mediante carta simple, sin sustento documentario de la necesidad de dicho pedido. Dicho monto fue incluido en el presupuesto del sector Actividad 5000003887, Apoyo Social a las Poblaciones Vulnerables, parte del monto fue destinado para la compra de ocho millones doscientos cuarenta mil pañales, materia de la investigación.

Estos cincuenta millones asignados al MIMP para la actividad de apoyo social fueron transferidos dieciocho millones a través de modificaciones presupuestarias, tal como se puede visualizar en el cuadro que tienen a la vista.

El Presupuesto Inicial Modificado terminó en treinta y un millones doscientos noventicinco mil; el presupuesto ejecutado por la compra de pañales y otros llegó a quince millones seiscientos setenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro soles; y el saldo no ejecutado, revertido al Tesoro Público, fue de quince millones seiscientos veintitrés mil soles.

Los dieciocho millones entregados, vía modificaciones presupuestales, se asignó al siguiente gasto:

Transferido al Inabif, 11 millones doscientos cincuenta y siete mil.

Transferido al Programa Nacional de la Violencia Familiar, cinco millones setecientos mil.

Pago de remuneraciones y pensiones del personal de las 31 sociedades de beneficencia pública, cuatrocientos treinta y nueve mil.

Atención a niños y niñas en situación de calle, cuatrocientos mil.

Adquisición de equipos de comunicación, switch de red, ciento setenta mil.

Adquisición de equipos de certificador y analizador de red, equipos tipo Core, componente para servidores y otros, setecientos doce mil novecientos cincuenta.

Y para efectuar pago de beneficios sociales, trescientos noventa y dos mil soles.

Pagos diversos, cuarenta y cuatro mil, entre otros.

Del presupuesto al Ministerio de la Mujer se compraron pañales por el importe de seis millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos nuevos soles, según contrato 020 y 021, que también obra en el cuadro que se puede apreciar.

Presuntas irregularidades en la solicitud de asignación presupuestal

Es irregular el pedido formulado por la exministra Ana Jara Velásquez, quien solicitó un incremento del presupuesto por cincuenta millones de soles sin sustentar la necesidad, los beneficiarios ni contar con sustento técnico adecuado.

En esta medida los efectos inmediatos de este hecho supusieron el inicio de toda la operación contractual, sin la cual ésta no se hubiera producido. Fue la intervención, entonces, de la exministra Ana Jara Velásquez, la cabeza de los demás actos que uno tras otro configuraron, finalmente, el hecho colusivo con resultado dañoso.

Presuntas irregularidades en los actos preparatorios

La exministra Ana Jara Velásquez no efectuó supervisión de los procesos de contrataciones, compra de pañales, el pliego, incumpliendo el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La exministra Ana Jara Velásquez al expedir la Resolución 022013, del 2 de enero de 2013, delegó a la Secretaría General del MIMP la facultad para realizar la modificación presupuestaria, con lo que presuntamente facilitó la comisión del delito de malversación de

fondos, delito tipificado en el artículo 389 del segundo párrafo del Código Penal, toda vez que con este dinero asignado para apoyo social a las poblaciones vulnerables se terminó gastando de los cincuenta millones de nuevo soles en gasto corriente y compra de equipos informáticos, entre otros.

Se encontró responsabilidad en la señora Elsa Estrella Cubillas Bueno, ex Secretaria General del MIMP, ex Directora General de la Oficina General de Administración, porque al momento de producido los hechos ocupaba el cargo de Secretaria General.

Asimismo, en tal medida, en su calidad de Secretaria General aprobó la modificación del Plan de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2013 mediante Resolución 09, a través del cual incluye la compra de los mencionados pañales, con un conjunto de deficiencias el manejo de la red pública, como son: carecer de sustento técnico respecto a la necesidad de la adquisición; carecer de un plan de almacenamiento de los mencionados pañales; carecer de un plan de distribución.

Su intervención facilitó de modo singular la cadena de irregularidades subsiguientes concomitantes: la señora Nadia Samantha Carreño Egusquiza, ex Directora de la Oficina General de Administración del MIMP, abogada de la Secretaría General, Presidenta del Comité Especial del Proceso de Licitación 04, por el cual se adquirió los artículos de pañales para bebés y niños, quien en su calidad de abogada de la Secretaría General elaboró el Informe 011, en donde precisó que sí procedía la adquisición de pañales para adulto mayor, careciendo de sustento alguno. Además, habría dado trámite a los requerimientos de pañales y visó la resolución ministerial que aprobó las orientaciones a seguir para la adquisición de esta cantidad de bienes, sin advertir la falta de documentación.

El señor Marco Antonio Vallejos Castillo, ex Jefe de la Oficina de Abastecimiento, Servicios del MIMP, Presidente del Comité Especial de la Licitación 002, adquisición de pañales para adulto mayor, quien solicitó la modificación del Plan Anual de Contrataciones del MIMP para el ejercicio fiscal 2013. En esta medida el referido funcionario fue quien solicitó a la Oficina de Presupuesto e Inversiones la certificación presupuestal para la adquisición, de que incluya ocho millones ciento veintiocho mil pañales. El referido funcionario suscribió los pedidos de compra, a través de los cuales solicitó la adquisición de la mencionada cantidad de pañales.

Presuntas irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de las mismas

En el proceso de adquisición de los pañales para bebés y niños se tomó como valor referencial la cotización emitida por la empresa ZB Distribuidores SAC, cuyo rubro principal es la distribución mayorista de abarrotes, bebidas y tabaco. Este acto muestra claramente el trato sucesivo de actos que conllevaron al resultado final de red dañoso y perjudicial para el Estado.

En las bases administrativas de los citados procesos, se incluyó requisitos específicos, todos los cuales permitieron otorgar la buena pro a un único postor.

El Comité Especial de Adquisición de la Licitación Pública 02, Adquisición de Artículos para Adulto Mayor para Asistencia de Poblaciones Vulnerables, obvió confirmar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos por parte del postor ganador, consorcio Kimberly-Clark, lo que permitió la obtención de la buena pro.

Se suscribió el Acta del Comité Especial el 15 y 16 de junio de 2013, en el que se dio la buena pro al único postor participante. Sin embargo, en dicho acto este postor omitió incluir en su propuesta técnica para el ítem 1 copia simple del certificado de Registro Sanitario vigente u otro utilizado por el Digemid, por lo que su propuesta debió haber sido rechazada.

Se ha modificado las cantidades y plazo de entrega de bienes establecidos en las bases administrativas de los procesos de selección en las que obtuvo la buena pro el contratista y los contratos suscritos a través de adendas que modificaron las condiciones originales que motivaron la selección, obviando el cobro de penalidad por incumplimiento de entrega de los bienes en las fechas establecidas.

De las presuntas irregularidades en el proceso de almacenamiento, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicio de MIMP participó como miembro del Comité Especial en ambos procesos de selección, conocía de la falta de almacenes y pese a ello no objetó estas omisiones en el estudio de posibilidades que le hicieron llegar para elaborar las bases administrativas correspondientes.

Se habría determinado un gasto innecesario al Estado por concepto de alquiler de almacén ubicado en el distrito de San Luis, pago de servicios por un monto de trescientos veintitrés mil trescientos dos soles. Se determinó un faltante de un millón trescientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro pañales, pérdida que se había producido entre el 13 de marzo de 2014, fecha en que se elaboró el Informe de la OGA, en donde no se detectó pérdida alguna; y el 12 de marzo de 2015, fecha en que se realizó el informe de Contraloría, en donde ya se detectó la suma faltante anteriormente mencionada.

Sobre la pérdida de los pañales, el equipo de auditoría de la Contraloría General efectuó el conteo físico en abril de 2015 con la presencia del funcionario del Ministerio Público y la Fiscalía, verificando el stop de pañales de cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve, y un faltante de un millón trescientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro.

Asimismo, este equipo de auditoría manifiesta que según la documentación existente, el faltante se había producido entre las fechas anteriormente mencionadas, es decir, durante la gestión de la exministra María del Carmen Omonte Durand.

La exministra y congresista María del Carmen Omonte Durand fue nombrada ministra de la Mujer en el período febrero 2014 al 17 de febrero 2015. Sin embargo, habiendo tomado conocimiento de la significativa compra de pañales y de la falta de almacén donde custodiaban los bienes y de la falta de beneficiarios de dicha compra no tomó acciones hasta el 22 de enero de 2015, mediante

Oficio 015-2015, dirigido al Contralor General de la República, solicitando que efectúe una auditoría exhaustiva de la mencionada compra, es decir, once meses después de asumir el cargo.

Dentro de las presuntas responsabilidades encontradas en el informe, se encuentra responsabilidades en el delito de colusión agravada, delito de omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales.

En las conclusiones: primero, el Pleno del Congreso, a propuesta del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para el año 2013, consideró un incremento de cincuenta millones de nuevos soles para el presupuesto del Ministerio de la Mujer, propuesta que se concretó en virtud del pedido de la exministra Ana Jara Velásquez sin sustento de necesidad de documentación alguna.

Segunda conclusión, se habría efectuado modificaciones presupuestarias desnaturalizando el verdadero objetivo de la asignación presupuestal original.

Tercero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables efectuó la adquisición de ocho millones doscientos cuarenta mil [...] por un monto de seis millones ciento cuarenta y tres mil setecientos, sin sustento de necesidad, sin plan de distribución, sin beneficiarios y sin un plan de almacenaje. No se efectuó la supervisión de los procesos de contrataciones.

Cuarto, la comisión ha determinado que se habría ocasionado un perjuicio económico ascendente a dos millones quinientos noventa y seis mil soles por penalidades no cobradas al contratista por retraso en la entrega de los bienes adquiridos.

Quinto, de la documentación analizada por esta comisión se ha encontrado que los procesos de adquisición de los citados pañales se ejecutaron incumpliendo la normativa de contrataciones del Estado, como cambio de características, requisitos de los bienes. Valor referencial para estas adquisiciones fue determinado en base a cotizaciones solicitadas a empresas no dedicadas la fabricación de los pañales.

En la sexta conclusión, el Jefe de la Oficina de Control Institucional del MIMP designada a cargo el 14 de febrero de 2013, fecha en que coincidentemente se inició el proceso para la adquisición de los ocho millones de pañales, no efectuó su labor de control preventivo, permitiendo con esta inacción la comisión de los hechos investigados en el presente informe.

Séptimo, se ha determinado la presunta existencia de indicios razonables de la comisión del delito de colusión agravada, malversación agravada y omisión de funciones por los hechos anteriormente mencionados.

Octavo, en el caso de las exministras, Ana Jara Velásquez y María del Carmen Omonte Durand, tratándose de altos funcionarios... Bueno, esta no, está salió, perdón.

Recomendaciones:

Al Congreso de la República, exhortar al Presidente del Congreso para que en uso de sus atribuciones propicie medidas normativas

que impidan la aprobación de partidas presupuestales a los diversos niveles de gobierno sin sustento documentario, mucho menos sin sustento de necesidad.

Segundo, al Ministerio Público, remitir el presente informe al Ministerio Público con sus anexos, conclusiones y recomendaciones para que en uso de sus atribuciones inicie las acciones correspondientes en contra de los funcionarios señalados anteriormente y de quienes resulten responsables.

Tercero, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remitir el presente informe para que adopten medidas correctivas, el control preventivo y simultáneo de los procesos de adquisición de su sector.

Al Ministerio de Economía y Finanzas hacer un seguimiento más exhaustivo al presupuesto asignado a las diferentes entidades del Estado, procurando realizar una labor conjunta con la Contraloría y la OSCE para cautelar los fondos del erario nacional.

A la Contraloría, que en su calidad de representante del Órgano Superior de Control y Supervisor de la Legalidad de la Ejecución de Presupuesto del Estado, fortalezca la labor que desempeñan los jefes de la Oficina de Control Institucional, **(6)** a fin de garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, doctor Soto.

Había pedido en estricto orden el congresista Díaz Dios.

La congresista Ana Jara y después proseguimos con la relación ya preinscrita.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Le agradezco, señor Presidente, la deferencia entre pares.

Lo que pasa es que habiendo ya dado lectura la comisión mediante los funcionarios técnicos que usted preside, de este informe final, proyecto que se va a debatir y votar, considero por una cuestión de ética que yo no debo permanecer en este estado de la sesión. Yo me voy a retirar.

Pero sí le pediría que me permita por lo menos expresar algunos temas puntuales, porque esto tiene que quedar registrado fonográficamente por lo menos en el historial de la decisión que hoy día se va a adoptar, y luego procedo a retirarme para que ustedes puedan debatir con total libertad, y luego votar.

Señor Presidente, de lo que he escuchado, y estimo que mucho de los miembros de la Comisión de Fiscalización no han visto este proyecto de informe final, que ha sido cursado el día de ayer a los despachos no sé si por correo electrónico o físicamente.

Evidentemente, por yo tener interés he impreso el informe y lo he analizado y muchos de ellos seguramente han estado escuchando con atención la lectura que se ha dado al mismo hace algunos instantes.

Lo que yo noto, señor Presidente, de la lectura es que no parecieran entender los técnicos de la comisión que usted preside, porque yo no pongo en cuestionamiento su idoneidad, sino los

técnicos que hasta ahora no han entendido que la responsabilidad penal en el Perú es personalísima.

Muchos de los considerandos, antes de las conclusiones que se han dado lectura, hacen alusión a temas que no están dentro de la competencia de la esfera de competencia de un ministro de Estado, sino de las unidades orgánicas u operativas del sector. En este caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,

Además, continúan, perseveran en esta teoría de la famosa responsabilidad en cascada, que en el Perú en materia de derecho penal, y acá hay muchos abogados y a la sazón constitucionalista, está proscrita y yo lo he señalado las veces que me he presentado en el seno de esta comisión, no se puede aplicar la responsabilidad en cascada.

No pueden decir que como yo como ministra de Estado en determinado momento solicité un presupuesto y los funcionarios que designé entonces eso dio lugar a que hubiera una colusión, que se produjera tal o cual figura con el comité especial, que no se hubiesen cobrado en su momento multas por la no entrega oportuna de los bienes. Eso no corresponde a la esfera de competencia de un ministro de Estado, ni se puede aducir que por el ejercicio del cargo y por determinadas acciones yo soy responsable de lo que los funcionarios del sector hayan realizado. No existe la responsabilidad en cascada y eso quiero dejar sentado en este estado.

Por otro lado, señor Presidente, yo saludo que en muchos de los extremos del informe, sí, efectivamente se han hecho las correcciones del caso, pero de otro lado se insiste en atribuir hechos falsos a pesar de haber denunciado este grave comportamiento, sobre todo en la última presentación que tuve con la asesoría de mi abogado, que también hizo uso de la palabra el doctor Roberto Pereyra.

Señor Presidente, en sus páginas 61 y 68 para quienes tienen impresa el informe, páginas del 61 al 68, se sostiene en blanco y negro, es decir, literalmente, que participé en los procesos de adquisición de menor cuantía 005-2013 y la Licitación Pública 004-2013 del MIMP, se trata de una afirmación temeraria, porque simplemente yo como ministra de Estado no he participado en ninguna etapa de esos procesos de adquisiciones, no me corresponde participar no solo porque, reitero, no forma parte de mis funciones como ministra de Estado, sino porque la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento son absolutamente explícitos en determinar qué áreas y funcionarios son los que participan en cada etapa de los procesos de selección y que, ciertamente, no se contempla la participación de un ministro de Estado.

Un hecho grave e inaceptable la imputación de falsedades como las que he señalado, que tiene, señor Presidente, si se mantiene la voluntad de liberar en este texto como único proceso el forzar acusaciones penales que afectan mi honor y reputación política. Más aún grave por el hecho que tales afirmaciones ya han sido advertidas por mi persona en el pleno de la Comisión de

Fiscalización y a través de dos escritos por lo menos presentados en el seno de esta comisión.

En segundo lugar, señor Presidente, el informe me imputa delitos a pesar que admite textualmente que no ha encontrado prueba alguna en mi contra, así lo señala el informe. Acá lo que se ha leído es un resumen, pero el informe es extenso y ahí literalmente dice que pese a que no se ha encontrado prueba en mi contra, se me imputan delitos.

Expresamente, en cuanto al delito de colusión se sostiene, entre comillas, lo estoy comillando y lo estoy resaltando, lo cometí siempre y cuando en el futuro se acredite de que concerté con los postores o con los funcionarios del Ministerio de la Mujer de aquel entonces, que participaron en los procesos de selección, siempre y cuando en el futuro se acredite que los cometí.

El informe omite el hecho que tampoco ha encontrado evidencia alguna de otro elemento esencial para que se me pueda imputar el delito de colusión, esto es que haya intervenido en los procesos de adquisiciones en razón de mi cargo. Esto es una función inherente a mi cargo de ministra de Estado.

Dice: "Si se prueba en el futuro de que concerté ilícitamente con los funcionarios del ministerio". No puede haber una redacción de estas características en una comisión de Fiscalización, y a mí hasta ya me hace dudar del voto que he expedido en tantas ocasiones aquí en la Comisión de Fiscalización, confiando en el profesionalismo y la especialidad de los técnicos, no todos, de la Comisión de Fiscalización, que a usted le elevan un informe que hace suyo.

Yo estaba a punto de saludar a la doctora Moscoso, por su intermedio, porque me parece brillante que una funcionaria de carrera tenga una memoria tan privilegiada para sustentar, como en el punto anterior, los informes que hemos llevado al voto. Así me encantaría que fueran todos los funcionarios que tienen una delicada función de asesorar a los congresistas, sobre todo en una comisión de estas características. Pero yo no creo que la doctora Moscoso, ni mucho menos usted, señor Presidente, puedan poner en blanco y negro que soy culpable de las comisiones de tales delitos siempre y cuando en el futuro se acredite que los cometí.

Y en cuanto al delito de malversación de fondos, se me imputa la comisión de este delito, pero lo condiciona a que en el futuro se pruebe que concerté con la ex Secretaria general de aquel entonces del Ministerio de la Mujer, que sí compareció en esta Comisión de Fiscalización, cuando estaba bajo la presidencia —entiendo— del doctor Enrique Wong. Pero todo esto ha tenido que formar parte del análisis que han tenido que verificar los técnicos de la comisión.

Entonces, se reconoce, señor Presidente, que no existe evidencia alguna de ninguna concertación ilícita a la fecha y el delito de omisión de funciones. A mí me sorprende que en el informe se me imputen dos acciones, esto es dos hechos comisivos y no omisivos.

Yo he actuado, se señalan dos conductas, eso no puede ser un delito de omisión, más bien debería ser lo que yo haya dejado de hacer en el ámbito de competencia como ministra de Estado, como se exige

así la figura penal. No se puede calificar así esto como una conducta comisiva porque es una grave contradicción.

En cuanto a la solicitud presupuestaria, que contó con la validación del Ministerio de Economía y Finanzas del Presupuesto de los cincuenta millones y que luego fue llevado a votación por el Pleno del Congreso de la República, en el escenario y en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2013, es ilícita desde el punto de vista de los técnicos de la Comisión de Fiscalización. Esa solicitud que ha sido validada por el MEF y ha sido votada por el Congreso de la República es ilícita para Ana Jara, pero sí es lícita para dos instituciones con autonomía constitucional, la Contraloría General de la República, que lo valida y en mérito de la cual no solamente el tema de presupuesto, sino su utilización han logrado que se pueda establecer las posibles responsabilidades de más de 20 funcionarios.

Y en cuanto a la resolución ministerial, ya estoy acabando, Presidente, que están incluidas en este supuesto delito de omisión de funciones, porque yo he solicitado un presupuesto sin el sustento técnico, me dicen, que fue validado por el MEF, que es el ente rector en materia presupuestaria.

Yo puedo haber pedido el oro y el morro y el MEF tenía que decir si era procedente o no y el Congreso de la República habérmelo rechazado en el Pleno.

Yo le puedo pedir acá, señor Presidente, a usted matrimonio y usted está en toda la voluntad de no aceptarme. Es que es así.

No se me puede a mí achacar una conducta ilícita cuando no depende de mí el otorgamiento de ese presupuesto.

Y con respecto a la resolución ministerial...

Lo quiero sacar, señor Presidente, de su letargo, porque veo que no está concentrado en la exposición. (Risa). La resolución...

Disculpe, señor Presidente, es sin mala fe.

La resolución ministerial que la incluyen como una conducta comisiva, la 037-2013, la famosa Resolución Ministerial 037, a inicios del ejercicio fiscal del año 2013, donde tengo que ejecutar el presupuesto, llamada orientaciones para la gestión de apoyo social, esto, señor Presidente, es una herramienta de gestión.

Acá el congresista Javier Velásquez Quesquén, por su intermedio, ha sido Primer Ministro, el congresista Alejandro Aguinaga ha sido ministro de Estado y de repente se me están escapando algunos nombres en esta comisión, pero estos son instrumentos jurídicos que nosotros expedimos, los ministros de Estado para hacer más viable la gestión administrativa y que lo hacen todos los sectores, desde la PCM hasta el Ministerio de Inclusión Social.

Y gracias a esta resolución ministerial es que se establece como parámetro normativo a efectos de establecer las responsabilidades en las investigaciones por parte de la Contraloría General de la República y el propio señor Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ellos me validan la expedición de esa resolución tomándola como base para luego elaborar los considerandos y llegar a las conclusiones.

Son dos auditorías, señor Presidente, que no se han tomado en cuenta en el seno de esta comisión, la auditoría por la compra de los pañales, famosa compra de los pañales y demás bienes de carácter social; y la auditoría por los cincuenta millones de soles, que nace desde el momento inclusive desde que se prueba el Presupuesto General de la República. ¿Cómo una decisión que es absolutamente legal, la solicitud de un presupuesto, que la valida el ente rector en materia presupuestaria, que la vota el Congreso de la República, puede ser para los técnicos de la Comisión de Fiscalización un acto ilícito? No existe explicación racional y técnica para responder a esta interrogante.

Y aún más, señor Presidente, si esto al momento en que es contemplado en el informe, y estimo que los señores congresistas luego del análisis correspondiente habrán de retirar estas incongruencias del informe final, es que ustedes solicitan en las conclusiones hacer un pedido al Presidente del Congreso de la República para que se legisle, se expidan normas, se expidan leyes a efectos que el ente rector en materia presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, no otorgue presupuesto a los sectores del Estado si no tiene sustento técnico. Es decir, es una figura que se va a regular recién, que no está establecido como una causal de delito, y entonces si no es una causal de delito, ¿por qué se me quiere aplicar a mí a la fecha como una comisión de delito? Eso no tiene, señor Presidente, coherencia y, además, es ilegal.

Tercero, el informe no sustenta las imputaciones penales en mi contra en ningún informe técnico de estos entes especializados, y yo no voy a entrar ahí en mayor detalle porque ya lo hemos expuesto con mi abogado, ni las dos auditorías de la Contraloría General de la República, ni la resolución del Fiscal de la Nación dado a mi condición de exministra de Estado, ni tampoco el Ministerio de Economía y Finanzas, que dice que esto que ustedes han señalado como una irregularidad de los considerandos, la distribución de los cincuenta millones, es perfectamente válida y se ha sujetado al artículo 40 de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta este extremo en el informe final.

Cuarto, señor Presidente, y ya con esto termino, el informe recurre a las apreciaciones personales, a los dichos de la exministra Carmen Omonte, contenidas en el Oficio 208-2015-2016-COD/CR, para imputarme supuestas omisiones, y esto lo podemos encontrar en las páginas 119 al 121. Es un hecho sin precedentes porque le resta seriedad y profesionalismo al informe, porque lo toman como fuente de una opinión técnica de supuestas omisiones (7) funcionales imputadas a mi persona, dirigida a la Comisión de Fiscalización. Se trata de dichos o apreciaciones de la exministra de Estado, que, en todo caso, siendo dichos debieron haber sido corroborados, debieron haber sido probados por la Comisión de Fiscalización.

Esto no se puede tomar como prueba plena ni como verdades absolutas, presidente, por una razón simple y sencilla: la señora Carmen Omonte, quien me merece todo el respeto, que también al igual que yo ha sido apartada de la investigación por el señor fiscal de la Nación, en el extremo de las investigaciones, porque esto corre todavía a nivel de la Fiscalía Anticorrupción, porque

acá no habrá borrón ni cuenta nueva, acá se tiene que sancionar con severidad, presidente, ella es parte interesada de las resultas de esta investigación.

Ella también tiene la condición de investigada por esta comisión, en este caso de la compra y pérdida de los pañales. Cómo alguien que es parte interesada, que está a las resultas de una investigación pueden tomársele en cuenta sus dichos en un informe final. Acá denunció discriminación.

En el informe final no se hace alusión a una sola palabra de las auditorías de la Contraloría General de la República, que es el ente rector y fiscalizador del gasto público. No se toma referencia a la resolución del señor fiscal de la Nación, que declara no haber lugar a iniciar siquiera una investigación a las exministras de Estado.

No se hace alusión al Ministerio de Economía y Finanzas, que se pronuncia que la redistribución de los 50 millones dentro del Ministerio de la Mujer se hizo de acuerdo a la Ley de Presupuesto, porque esta era una actividad y no una partida. Y no se toma en cuenta a ninguno de mis argumentos, ninguno de mis alegatos ni a mi defensa. Sin ir muy lejos, la última que tuve en la pasada sesión con mi amigo Roberto Pereyra en esta comisión.

A nosotros nada. Ni a estos entes especializados y autónomos constitucionalmente, nada. La defensa de Ana Jara, nada. Pero los dichos de la señora Carmen Omonte sí son reconocidos como verdades absolutas y recogidas en un informe.

Finalmente, qué es lo que dice la señora Carmen Omonte. Ella se refiere a temas de contrataciones, que está dentro de la esfera de competencia de las unidades orgánicas, del comité especial y las unidades de abastecimiento y de administración. Contrataciones habla de almacenes y habla de distribución de bienes. Eso no tiene nada que ver con las competencias de un ministro de Estado. Sin embargo, son recogidas para imputarme a mi responsabilidad.

Presidente, acá pongo como testigos a los congresistas, las veces que he venido a sustentar mis informes, no he levantado palabras acusatorias contra la gestión que continuó en el cargo cuando salí del Ministerio de la Mujer. Me limité a hablar del ámbito de mis competencias, de lo que a mí se me imputa. No he venido a hablar de lo que yo creo que puede haber pasado después que me retiré del Ministerio de la Mujer, a inicios del 2014.

Entonces, no considero que alguien, que es parte interesada, como señalo, de las resultas de este proceso, sí pueda elucubrar y acá ser tomado como una opinión válida sin haberse corroborado los hechos.

Por esas consideraciones, señor presidente, reitero mi pedido de que se corrijan estas incongruencias jurídicas, además hechos falsos, que no se permita instituir en el seno del Congreso de la República el hecho de que se le atribuya a una persona la responsabilidad penal en cascada, figura que está proscrita por nuestra legislación. Además, señor presidente, esto para mi constituye un hecho injurioso.

Si esto se mantiene como está redactado, lo único que va a ocasionar es el desgaste de mi imagen, de mi buen nombre y de mi reputación. Además, señor presidente, haber sentado precedente de un tema que a cualquier gestión, que a cualquier persona que quiera en el futuro ejercer el cargo de ministro de Estado, finalmente le va a hacer reflexionar.

Estamos debilitando la institución del cargo de ministro de Estado, atribuyendo hechos que son de competencia de las unidades administrativas u orgánicas.

Señor presidente, le agradezco la paciencia. Quedo a disposición de los señores congresistas, si usted me permite.

Voy a estar en el ambiente aledaño. Entiendo que la agenda continuará luego que se ventile este tema.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Las gracias a usted, congresista Ana Jara. La mejor de las consideraciones. Felicito sus alegatos.

Pasamos al análisis de los señores congresistas.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidente, disculpe que le esté interrumpiendo.

Mis colegas parlamentarios me señalan que de repente es necesario absolver alguna duda, que puedo permanecer. Evidentemente, en el momento de la votación me voy a retirar. No corresponde que me quede en ese estado.

Siendo así, con anuencia de mis colegas, me voy a quedar. Si usted lo tiene a bien, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS ().— Gracias, presidente.

Para ir al tema de fondo y hablar de este tema tan complicado y que ha indignado, creo, a millones de peruanos que siguen este caso, me gustó la frase "no debe haber borrón y cuenta nueva". Se tiene que necesariamente castigar a los responsables de un robo. Este fue el calificativo que utilicé cuando estuvo con nosotros la exministra Carmen Omonte. Me reafirmo en ese sentido.

Más allá de algunas discrepancias que han sido públicas, que he tenido con la exministra y congresista Ana Jara, por encima de todo no se puede utilizar la Comisión de Fiscalización para venganzas, ajustes de cuentas o no ser objetivos en las investigaciones que el país nos está encargando.

En el caso concreto, señor presidente, lo que podemos ver son dos archivos prácticamente que ha hecho la Contraloría respecto a las exministras, no respecto a que ha existido nada irregular en esta compra y distribución de pañales. De la misma manera, el fiscal de la Nación ha hecho un pronunciamiento formal liberando de alguna manera de responsabilidades a Carmen Omonte y a Ana Jara.

Si bien es verdad que nosotros como comisión no estamos vinculados, hacemos investigaciones absolutamente independientes o autónomas, también es cierto que se tiene que tener en cuenta lo ya avanzado a nivel del Ministerio Público y Contraloría.

Comprendo que puedan haber todavía alguna suspicacia respecto al pedido de los 50 millones de soles. Sin embargo, si a nivel de esta comisión, más allá del trabajo de la Fiscalía, no hemos podido vincular ya ese pedido hecho por la entonces ministra Ana Jara con los funcionarios que están siendo hallados responsables en nuestro informe por diferentes tipos penales, no podríamos acusar en un informe final a la exministra Ana Jara.

No se pudo decir: si es que probamos de que hubo concertación, si probamos que se pusieron de acuerdo con estos funcionarios, por lo tanto la exministra tendría que ser acusada. Creo que debió ser al revés. Debimos probar primero. Y si no lo hemos podido hacer en ese extremo al día de hoy, lo que corresponde es recoger los argumentos esgrimidos por Contraloría y el Ministerio Público, que, por cierto, son investigaciones que no han culminado. Son investigaciones que a diferencia de la nuestra, estamos culminando la investigación a nivel de la Comisión de Fiscalización.

Si más adelante el fiscal de la Nación o, eventualmente, la Contraloría, sobre todo el fiscal de la Nación, logran encontrar este supuesto vínculo, ahí sí, presidente, correspondería una acusación, una denuncia con las respectivas consecuencias jurídicas como es, incluso, la cárcel o condena efectiva para los corruptos, que ha sido una de las iniciativas que trabajamos con la Contraloría desde la Comisión de Fiscalización.

Siendo así, presidente, sugeriría, lo pediría como cuestión previa, poder aprobar el informe que usted nos ha presentado, que en todo caso es un borrador, eso hay que precisar siempre, quitando aquellos extremos que vinculan a las ex ministras Carmen Omonte y Ana Jara, por los argumentos -reitero- esgrimidos.

Recordemos que el solo hecho de solicitar presupuesto de un ministro, pues caerían todos los ministros. Además, cuando se pide un presupuesto adicional es el propio Congreso quien termina aprobándolo, con lo cual "seríamos" hasta cómplices, si el solo hecho de pedir ampliación de presupuesta fuera indicio para condenar a una persona o acusar a una persona.

Si hubiera un nexo causal probado entre el pedido de los 50 millones y alguna concertación con algún funcionario, responsable directo de haberse robado esos 50 millones, no tendríamos nada que discutir y estuviéramos en este momento ya aprobando el informe, y exigiendo al fiscal de la Nación medidas sumamente duras.

Sin embargo, presidente, me parece que por la lectura del informe y lo expuesto no se ha llegado a esa conclusión.

Ese sería mi pedido, presidente, como cuestión previa, a menos que colegas parlamentarios tengan una posición diferente a la mía, con lo cual se tendría que llevar esto a votación.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Martín Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, presidente.

Está bastante claro que cuando existe una imputación o una presunción dentro de una investigación, tienen que haber los

elementos probatorios de convicción que determinen que hay una infracción penal.

Presidente, dentro de la investigación que ha llevado la comisión al momento no se ha podido probar ni corroborar que haya tenido participación alguna la exministra Ana Jara. Consecuentemente, es bueno que esta comisión reflexione justamente sobre los extremos. Todos somos pasibles de tener cualquier imputación. El extremo que se señala es pasible de delitos si en el futuro se probase, todos estamos en esa condición.

Ahora, una reflexión. Ya ha habido un archivamiento por parte de la Contraloría en el extremo de la participación de las exministras. Y ha habido un archivamiento del representante del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal dentro del rango y marco constitucional. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Nosotros como comisión investigadora les remitimos el informe para que ellos procedan de acuerdo a sus atribuciones.

En este caso hasta el momento no ha sido probado y no se ha determinado que exista una imputación real y verdadera entre una situación de contubernio o una situación de colusión, una situación de acuerdo, dentro de la investigación que se ha hecho en esta comisión.

Creo que hechas las exposiciones de los colegas debemos sacar el extremo que alude a las exministras. Ya lo han dicho aquí los colegas que son abogados, han sido bastante claros. No está archivándose la investigación que sigue. Es una investigación que va a continuar conforme a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad, si la hubiera. Y serán las instancias correspondientes las que determinen el grado de responsabilidades.

En este estadio, presidente, está claramente demostrado que no existe participación de las exministras en los hechos materia de investigación por parte de la comisión.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GFPF).— Gracias, presidente.

Creo que acá hay un hecho claro y contundente. Hay 50 millones de soles que no estaban inicialmente en el presupuesto, que en el mismo Parlamento se modificó. Se dio ese presupuesto adicional, que parte de ello fue utilizado en la compra de estos pañales.

Por otro lado, la Contraloría solo ha emitido una carpeta de control, porque este tema ya venía siendo investigado por el Ministerio Público. Por ese hecho la Contraloría **(8)** no ha podido tipificar si ha habido la comisión de algunos delitos. La Contraloría, presidente, no ha archivado esta investigación sobre las exministras Ana Jara y Carmen Omonte.

El hecho de que el fiscal de la Nación no haya estimado formalizar una denuncia constitucional, no significa que esta comisión o algún congresista pueda finalmente formalizarla.

Creo, presidente, que acá no ha quedado desvirtuado por la Contraloría ni la Fiscalía de la Nación, que están tomando como referencias, que no ha habido comisión de delitos por parte de las dos exministras.

Por lo tanto, mi posición es que ese informe debe votarse como está.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alejandro Aguinaga.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GPEP).— Gracias, presidente.

Una democracia se consolida cuando hay el irrestricto respeto a la independencia de poderes. Si nosotros comenzamos a socavar otros poderes, es evidente que estamos arruinando lo que es una democracia.

Entonces, el ánimo persecutorio del delito lo tiene el Ministerio Público. Hasta que el Ministerio Público no resuelva, todos tienen la presunción de inocencia. Pueden aducir sus razones o sus sinrazones. Pueden abogar o no abogar. Pero todos están premunidos de la presunción de inocencia.

Que de allí se utilice el aparato judicial o se politice el aparato judicial con ánimo persecutorio, es lo que se tiene necesariamente que evitar. Y que sea este momento un punto de quiebre.

En lo personal sí tengo, la verdad, el mayor de los desagradados de lo que es la justicia en el Perú. Como exministra la congresista Jara tiene una situación de gracia, a través del artículo 99 de la Constitución, que es el antejuicio, que en el caso mío se realizó en un Congreso adverso, donde no teníamos congresistas, y se archiva por unanimidad.

Le hago un paralelo con el caso del señor Chehade, que el voto dirimente de un congresista lo salva de la acusación constitucional. Inmediatamente el fiscal de la Nación le saca una resolución. Prueba de ello es que el coautor de los delitos que se atribuyen está preso, pero se le respeta al congresista justamente lo que señala el artículo 99 de la Constitución, y le dan validez jurídica y política a lo que se resolvió en el Congreso, que no respetó en el caso particular mío.

A pesar de ello, la fiscal de la Nación, que hace otra investigación en la mal llamada esterilizaciones forzadas, la fiscal Nelly Calderón, cuatro años de investigación, resuelve también que no hay ninguno de los delitos atribuidos, pero se sigue no respetando a diferencia del fiscal Peláez que sí le resuelve al congresista, y en el caso mío él mismo reabre no teniendo facultades para reabrir, porque antes de ello ya había tenido dos archivamientos más en la Fiscalía de Derechos Humanos.

El fiscal Peláez en un caso valida el antejuicio y saca una resolución exculpatoria, en el otro caso saca una resolución reabriendo, violentando lo que ya había señalado la fiscal de la Nación, porque no sacó una resolución para dejarla sin efecto, y traen a un fiscal prontuario para que se preste a esta reapertura, que se vuelve a archivar por quinta vez en enero de 2014, y hoy día estamos en un período de queja más larga de la

historia judicial, una queja que demora tres años. Y estamos siempre en lo mismo.

Por eso, en buena hora, si el Ministerio Público resolvió de tal manera, nosotros, en aras de la independencia, tendríamos que respetar. Si no estaríamos violentando la independencia de poderes, de la cual soy una víctima. Eso no debe pasarle a ningún ciudadano en el país.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Simon.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Gracias, presidente.

Solamente para recordar al congresista Aguinaga que en el caso de Chehade no hubo voto dirimente. Hubo mayoría y minoría. El que da el voto dirimente es el presidente del Congreso, en ese caso. Habría que reclamarle al señor Abugattás. Es bueno aclarar.

Presidente, estamos hablando de 31 millones de soles, no de 50 millones de soles. El pedido fue de 50, y el tema de los pañales fue de 31 millones.

Cuando la congresista Ana Jara habla del papel de los ministros, es serio. Como ex primer ministro, sé que si queremos mayor presupuesto, el ministro de Economía no nos da tan fácilmente el dinero, tiene que estar justificado, y el Congreso aprobó ese presupuesto.

Cierto es que hay un escándalo. Cierto es que la gente va a decir: "Bueno, se avaló a las ministras", si el expediente estuviera bien hecho. Lamentablemente, el informe tiene fallas. Una de las fallas, como en efecto lo dice el congresista, en la página 118, y uno tiene que leerlo tal como está, dice: "Efectivamente, la ejecución de las tres decisiones referidas no suponen en sí mismas una vulneración de normas ni la comisión de un delito".

Esto es grave, presidente. O sea, la comisión está diciendo que no ha habido delito o no supone delito. Sin embargo, terminamos acusando. Y eso creo que habría que corregirlo.

Por otra parte, "en la medida que se acredite posteriormente que existe algún concierto con particulares, ganadores de la buena pro".

Creo, presidente, que si esto no se corrige estaríamos votando mal. Yo no podría votar por un informe de esa naturaleza, porque sería cómplice de decir: si mañana no le prueban, yo la acusé. He sido primer ministro y he pedido presupuesto, mañana, por pedir ese presupuesto, por mala acción de los funcionarios, terminan también denunciándome.

Entonces, se pone ahí en una posición complicada a quienes van a ejercer en el futuro cargos de ministros. Las reglas tienen que estar muy claras.

No estoy de acuerdo con la acusación constitucional en el Congreso ni con que esto vaya al Pleno. Ya lo dije en anterior oportunidad. Estoy de acuerdo, lo sabe la congresista Ana Jara, con que esto vaya a la Fiscalía. No con esa acusación, sino de una manera mejor redactada.

Por el bien de la congresista y por el bien de todos, creo que la Fiscalía tiene que ratificar si no hay delito. Ya lo ha dicho, que lo ratifique. Pero de ninguna manera poner delitos que no están probados. No sé si me dejo entender, presidente.

Hoy no tenemos una imagen ante nosotros mismos. Tenemos que dar buena imagen ante la población, de por medio también hay otra denuncia de si se justifica o no, si tiene que venir al Pleno o no.

Por lo tanto, mi planteamiento, presidente, es no a la acusación constitucional, que me parece bien que se haya sacado del informe, se tienen que corregir los errores del informe, y sí hay que mandarlo a la Fiscalía para que se pronuncie.

Esa es mi posición, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Me pide una interrupción la congresista Jara. Con mucho gusto, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Ana Jara.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Gracias, presidente.

Saludo las intervenciones de mis colegas parlamentarios, cada uno desde su punto de vista, presidente. Pero creo que estamos alcanzando el consenso de que no se pueden imputar delitos con cargo a demostrarse en el futuro, mucho menos por haberse tomado acción y considerarse como una omisión de funciones.

Eso que señala en su momento, presidente, el congresista Yehude Simon, corregir errores, son precisamente los referidos a la imputación de los delitos en mi contra. No considero que sean errores. Capaz en el entendimiento de los técnicos de la comisión es decir: con cargo a que se prueben en el futuro. No, quedó probado. Y proceden imputándome los delitos.

Simple y llanamente como, creo, alguno de mis colegas lo solicitará, pido se me excluya y la misma suerte a la congresista y exministra de Estado, Carmen Omonte, en este tema. Como bien lo ha anotado el congresista Aguinaga, exministro de Estado, el Ministerio Público ya se pronunció.

Este sambenito de los 50 millones, presidente, lo he preguntado acá, principio de inmediatez. Cuando vino el contralor de la República, Fuad Houry, a dar cuenta de su gestión hace algunos días al seno de la comisión, le pregunté y le dije: "ustedes han hecho una auditoría de los 50 millones también. ¿Halló en mi responsabilidad?". Dijo que no.

Entonces, no sé porqué acá han señalado que son los pañales, pero acá hay un tema de los 50 millones. Todo eso ha sido ya analizado por la Contraloría. Ya se iniciaron los procesos administrativos, porque ellos tienen facultades sancionadoras a los administrativos.

Y la Fiscalía Anticorrupción, que es la Fiscalía Provincial, continúa sus investigaciones. Es un tema complejo con más de 20 funcionarios, de acuerdo a sus competencias, implicados.

Gracias, presidente. Gracias, congresista Velásquez.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Congresista Velásquez, un segundo, por favor.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Con mucho gusto.

El señor PRESIDENTE.— Segunda interrupción.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, de repente la palabra correcta no fue "errores", "horrores" en todo caso. Porque no se puede probar a futuro un delito. Hay que corregir el informe.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, gracias.

A veces los malos precedentes llevan a este tipo de producción de informes que se contradicen con la Constitución y el Reglamento.

La congresista Jara formó parte de una bancada que sentó un nefasto precedente en la Megacomisión, en la que se imputaba responsabilidad penal al presidente de la República y a los ministros por la sola emisión de normas.

Este documento parece que lo hubieran hecho los asesores del señor Tejada. Lo voy a explicar. Lean la séptima y octava conclusiones.

"Los supuestos actos colusorios o de malversación de fondos o de omisión de funciones, que deberían tener como elemento indiciario una imputación concreta". Rápidamente he podido leer el informe, no hay un funcionario que haya dicho que la ministra tal dijo que le compraran a tal. Ese es un acuerdo colusorio.

En la conclusión octava se hace referencia a que habría la posibilidad de que haya la comisión de un delito por parte de la ministra, por la emisión de normas, de una resolución ministerial. Así lo dicen. "La emisión de la resolución ministerial".

Entonces, el Tribunal Constitucional no solamente en la sentencia de Tineo Cabrera o la sentencia Ecoteva, en varias sentencias ha determinado que la sola emisión de una norma no contiene en sí elementos de carácter punitivo y penal. Puede ser la norma que emita un ministro afectar la Constitución, para eso hay los mecanismos para expulsarle del ordenamiento jurídico.

Se ha discutido, no he estado en la sesión precedente, el tema de la responsabilidad de los ministros, y quiero advertir algo, presidente.

Viene una nueva mayoría parlamentaria. Ojalá no vuelva a suceder lo que sucede ahora. Las comisiones ordinarias no están facultadas para imputar responsabilidades penales a los ministros de Estado, a los funcionarios comprendidos en el artículo 99. Ni a los congresistas ni a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99.

Fíjense lo que dice el Reglamento respecto a las comisiones investigadoras. El Reglamento dice en su inciso g): "Cuando las investigaciones que realizan las comisiones de investigación". Esta es una comisión ordinaria. Tengo entendido que no tiene facultades de comisión investigadora, (9) salvo que me equivoque; si las tuviera mire lo que dice: Cuando en las comisiones de

investigación que realizan las comisiones aparezca la presunción de la Comisión de Delito, el informe de la comisión establece hechos y consideraciones de derecho con indicación de las normas de la legislación penal que tipifiquen los delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la formulación de denuncia contra los presuntos responsables.

Qué dice en el párrafo siguiente.

(Falla en la grabación) fueran altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99.º.

Supongo yo que este hecho por las características en el supuesto negado es un delito de función.

Entonces, qué dice: Si los imputados fueran altos funcionarios del Estado comprendido en el artículo 99.º de la Constitución Política, el informe debe concluir formulando denuncia constitucional. Entonces, las conclusiones no tienen correspondencia con las recomendaciones porque en las recomendaciones no hay ninguna alusión a este caso.

Pero yo quiero decir lo siguiente, Presidente, y no es porque tengamos miedo, en la Megacomisión de Lava Jato, a mí se me ha levantado el secreto bancario sin siquiera haberme invitado, me han levantado el secreto bancario sin siquiera haberme citado, invitado, congresista, venga, me han levantado secreto bancario.

Entonces, estos precedentes por tener de repente una notoriedad que afectan la honra, esto no supone que la congresista, los exministros que están comprendidos en este hecho que tienen que explicar, no supone que en un nuevo Parlamento si hay una investigación seria del Ministerio Público y establece en el supuesto negado que uno de los miembros de la comisión de adquisiciones dijera que la ministra lo llamó y le dijo: Sabe qué, cómprale a tal, evidentemente que eso se puede investigar ese acuerdo colusorio, los delitos no han prescrito, pero el fuero no es una comisión ordinaria.

Las comisiones ordinarias —que quede muy claro— no tienen prerrogativa, menos inclusive las que tengan facultad de comisión investigadora para establecer responsabilidad de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99.º. Por eso la forma como está redactado, Presidente, la recomendación séptima y la recomendación octava afecta no solamente al reglamento, sino afecta a la Constitución, y eso no supone que esto sea un manto de impunidad contra los exministros, está abierta la posibilidad de que se pueda seguir investigando porque los delitos de función tienen plazo de prescripción.

Pero lo que sí nosotros no debemos hacer es, fíjense, ahora yo sé que conozco la trayectoria de usted como presidente de la Comisión, pero yo creo que quienes han elaborado este documento han filtrado conclusiones que se contradice con las recomendaciones; y, segundo, es que esto es antirreglamentario y evidentemente no puede estar en la conclusión, por lo demás, mandemos al Ministerio Público como lo ha planteado Yehude Simon, que vayan al Ministerio Público todos los funcionarios, lamentablemente que como este es un órgano político siempre queremos...como el funcionario no lo

conoce nadie a él no lo denunciarnos, sino vamos tomando al ministro, vamos tomando al Presidente de la República porque eso genera notoriedad política. Pero las honras quedan manchadas, señor Presidente, yo sé, conozco de su prudencia y su sentido de responsabilidad, no perpetremos el abuso que otros cometieron cuando creyeron que porque tenían una mayoría numérica podían así avasallar la honra de los funcionarios que servimos al país.

Por eso, Presidente, quiero plantear que en el tema de estas conclusiones a ver que nos expliquen los asesores de dónde sacaron esta conclusión séptima y octava, cuál es el fundamento, acá está el reglamento, muy claro, y está referida a comisiones investigadoras que tienen prerrogativas, esta es una comisión ordinaria. Pero además quiero decir lo siguiente: El informe de la Comisión de Constitución del año 2010 ha establecido claramente que las comisiones ordinarias no pueden investigar a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99.º.

Si un ministro, si un congresista comete una falta ética, su fuero es la Comisión de Ética; si un ministro, si un alto funcionario, un vocal supremo, un congresista cometen un delito de función como supuestamente podrían ser estos, su fuero es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y aquellos que no estén de acuerdo, pueden hacerlo en el marco del artículo 88.º a título personal. Los congresistas que creen que los ministros tienen algún indicio de responsabilidad por este delito de función pueden hacer suya una denuncia y derivarla a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Yo quisiera dejar sentado este presente no con ánimo de defender a las personas que son materia de esta imputación, sino que este Parlamento no puede seguir cometiendo este tipo de estropicios que en el fondo, señor Presidente, afectan el honor de las personas. Una vez que sale esta noticia, después aunque lo archive el Ministerio Público o la Subcomisión y el daño está hecho.

Me pide una interrupción Juan Díaz Dios.

El señor PRESIDENTE.— Interrupción, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS ().— Presidente, simplemente señalar que lo que acaba de decir el congresista Velásquez Quesquén tiene precedentes en esta comisión. En más de una oportunidad nosotros hemos retirado los nombres de congresistas que han estado de alguna manera mencionados en los informes de esta comisión, precisamente porque un parlamentario solo puede ser investigado por tema ético moral por la Comisión de Ética, y si hay un delito de función en Acusaciones Constitucionales, de ninguna manera en esta investigación, lo cual no quita que por supuesto en aras de llegar a la verdad se pueda invitar a los ministros, a los congresistas para que puedan colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, Presidente, antes de terminar esta interrupción breve, me parece que hay un consenso en este sentido, de manera que yo a través suyo pediría a mis colegas parlamentarios, de repente, poder ir al voto de la cuestión previa que le planteaba al inicio para dar ya por zanjado este tema aprobando este informe, separando como lo habíamos argumentado ya a las ministras Ana Jara y Carmen

Omonte, excluyendo del proyecto de informe que se nos ha presentado.

Muchas gracias al congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Para terminar, quiero dejar bien en claro porque esto no se vaya a entender como una componenda, solamente digo que este es un tema de forma, que tiene consistencia de fondo, el artículo 88.º que he leído está referido a investigados de la comisión. La pregunta que debería hacerse esta comisión ordinaria: ¿podemos investigar los supuestos indicios de la comisión de un delito de un ministro de Estado? No se puede.

Entonces, para que no crea que este es un acto de impunidad queda salvo, si en el curso de la investigación el Ministerio Público o en el tiempo vuelven a aparecer indicios nuevos, eso de ninguna manera este informe se puede dirimir. Lo que no puede hacer, Presidente, es este informe concluir con responsabilidades al Ministro de Estado cuando no tienen la condición ni siquiera de investigados. El artículo 88.º hace alusión, muy claro dice 'investigados', ¿los exministros fueron investigados en la comisión? No, porque esta comisión no lo puede investigar, los puede invitar a que puedan exponer hechos, pero si hubiera algún indicio lo hubieran derivado a la subcomisión.

Me pide una tercera, cuarta y quinta interrupción, congresista.

El señor DÍAZ DIOS ().— Gracias, congresista.

El congresista Yehude Simon me hace una precisión, en todo caso para aclarar, Presidente. La cuestión previa no era para excluir de responsabilidad, no se trata de eso, nosotros tampoco no nos vamos a meter en el trabajo del Ministerio Público, sino simplemente retirar las menciones a las exministras ya señaladas, pero de ninguna manera tampoco podemos nosotros adelantarnos a lo que dirá la justicia más adelante de manera independiente y autónoma.

El señor PRESIDENTE.— Bien, ya son las dos interrupciones, en todo caso la interrupción [...?]

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Solamente dice la propuesta, Presidente, de que se retire la séptima y octava conclusión y todos los hechos que en la parte considerativa sustentan estas conclusiones.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Velásquez.

Congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, Presidente.

Está claro que las expresiones del congresista Aguinaga a quien no quiero aludirlo de manera personal, y también del congresista Mulder, no abonan en sí en el tono estrictamente...ah, perdón, Velásquez Quesquén, disculpen, como tienen la misma afiliación partidaria me equivocado, perdóneme usted, señor Presidente.

Siento sí que hay madurez, siento que hay un criterio muy objetivo que ya se sustentó en otras sesiones, de manera tal que yo no entiendo, Presidente cómo así su equipo técnico porque usted es

lego en materia jurídica, ciertamente no se le podría a usted imputar algún tipo de responsabilidad directa, pero sí a su equipo técnico que se ha esforzado la colega Ana Jara en brindar una exposición extensa, doctrinaria, jurídica sobre el tema de responsabilidad funcional básicamente, y cuánto es así que esa responsabilidad funcional puede ser atribuida a la ministra, yo también incluyo en esto a la señora Carmen Omonte.

Dicho esto, Presidente, yo sí quisiera decir si bien nosotros no estamos resolviendo una función judicial porque entonces sí estaría clarito que usted se va por prevaricato a la cárcel, porque esto es una afrenta gravísima al estado de derecho, pero como usted no es juez, no está prevaricato, pero sí está haciendo una imputación de denuncia calumniosa que no sería correcto determinarse en este momento.

Presidente, siento que el detalle de los puntos establecidos en los antecedentes que versan el sustento de lo expuesto en el punto tercero, en el punto séptimo y octavo del dictamen, puedan ser extraídos en el Capítulo V respecto a conclusiones, para poder dar de alguna forma la coherencia a lo que hemos estado abordando el día de hoy; y sin más preámbulo, achicar eso con cargo a redacción porque no podría en estos momentos redactarse, es un poco más tedioso buscar el detalle inclusive de cada imputación que pudiera haber en otros párrafos que no han sido señalados.

Pero antes de continuar, Presidente, yo con todo gusto le cedo la interrupción a la congresista Karina Beteta, si usted fuera tan amable.

El señor PRESIDENTE.— Damos la bienvenida a la congresista María Cordero, gracias por su presencia.

Congresista Karina Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (GPPF).— Gracias, Presidente, solamente para una aclaración al colega Gutiérrez. Que los congresistas si aprobamos este proyecto de dictamen, no cometemos prevaricato porque no somos ni jueces ni fiscales, solamente los jueces o fiscales si aplican una mala norma pueden cometer prevaricato.

Solamente esa atingencia, Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

Congresista Beteta, me ha librado de corregirle al congresista Gutiérrez, que es abogado.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— La divina providencia nos ha dado dos oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Yo si lo vuelven a reproducir todo lo que he sustentado, decía: "Si usted fuera juez, estaría cometiendo, pero como no lo es...Es más, he señalado otra figura legal que algunos creo que no han leído ni el Código Penal, no saben si quiera qué es una denuncia por temas de orden calumnioso, ¿no?, imputarse cargos de manera gratuita no creo que sean los más correctos.

Dicho esto, Presidente, no tengo nada que absolver en esa apreciación porque creo que he sido muy claro y hay que estar atento cuando uno quiere refutar ese tipo de posiciones.

Entonces, Presidente, en el tema de las conclusiones y las recomendaciones tiene que estar claro, Presidente, que no se trata de una disquisites*, ni de querer nosotros pedir algo que es ajeno a la sustentación del marco estrictamente jurídico, no, estamos involucrados en ese quehacer y, repito, me da agrado, me da gusto que haya posiciones de diversas bancadas expresando ese mismo sentir.

Muchas gracias, señor Presidente, y ojalá esta comisión pueda resolver este asunto de la mejor manera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Con la sabiduría de todos y cada uno de ustedes así se hará.

Muy bien.

El congresista Santiago Gastañadui, Molina, y Becerril.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Muchas gracias, Presidente, saludar a los señores parlamentarios.

Presidente, yo tengo algunas observaciones. Este informe que nos han alcanzado el día de hoy que ha sido elaborado, entiendo, por los señores asesores técnicos de la comisión, y si lo podemos dividir estas observaciones encontramos de forma y de fondo.

Presidente, todo informe tiene algunas partes, tiene los antecedentes, las cosas que han sucedido, hay un análisis, ahí se realizan algunas comprobaciones, finalmente conclusiones y recomendaciones.

Por ejemplo, sobre el tema de las conclusiones, estaba leyendo en el Internet qué se entiende por conclusiones y se dice: Se conoce con el término de conclusión a toda aquella fórmula o proposición que es el resultado obtenido luego de un proceso de experimentación o desarrollo y que establezca parámetros finales sobre lo observado.

Es decir, la conclusión se obtiene después de haber realizado los antecedentes y los análisis, pero cuando uno va a las conclusiones, uno se percata, por ejemplo, que se han tomado como conclusiones lo señalado **(10)** por ejemplo por la exministra Omonte, y eso no se debe tomar como una conclusión, en todo caso eso debió ponerse como antecedente o análisis, entonces yo creo que ese es un error garrafal; yo no sé si usted estará suscribiendo todo lo que dice la congresista Omonte, entonces yo creo que ahí está obediendo el informe.

Ahora, encontramos también algunas contradicciones entre la parte del análisis y las conclusiones cuando se establecen las responsabilidades penales, se entiende que las conclusiones son producto de los antecedentes y análisis y deben conversar entre ellas. Por ejemplo, cuando se establecen presuntas responsabilidades penales en el numeral 4.5 de la página 115, se señala con respecto a la congresista Ana Jara, dice: "Ana Jara

Velásquez, exministra del Ministerio de la Mujer, en la medida que se acredite posteriormente que existía algún concierto con particulares ganadores de buena pro", o sea, lo está condicionando para que en el futuro si encontramos este concierto habrá delito, pero cuando uno va a las conclusiones dice lo contrario, hay una aseveración, hay una afirmación.

Y justamente en esa apelación, esa afirmación qué cosa se dice, se dice, por ejemplo, que a partir de la ausencia justificación adecuada o de la deficiencia justificación verificada respecto de las tres decisiones indicadas, se puede afirmar que la exministra Ana Jara Velásquez habría incurrido en hechos constituido de indicio de la comisión en principio del delito de comisión de altos funcionarios tipificado en el artículo 377 del Código Penal, dado que omitió su deber de supervisión, entonces en qué quedamos, por un lado que me dice lo condiciona a que en el futuro se encuentre en concertación, y por otro lado que nos dice y está afirmando.

Entonces, parece que quien elaboró la parte del análisis finalmente no terminó elaborando la parte de las conclusiones, es decir, no hay una consecuencia lógica porque la conclusión debería ser consecuencia lógica de los antecedentes y los análisis, entonces yo creo que aquí hay una falla también por parte del informe. Y, como le digo, yo no le imputo directamente a usted la responsabilidad porque usted no es un abogado, pero los que hemos estudiado más o menos conocemos estos temas.

Luego, tenemos otros temas, por ejemplo, ese de vulneración de normas, se le atribuyen, por ejemplo, para sustentar su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos a la congresista y ministra, por ejemplo, haber solicitado una asignación presupuestal adicional; o sea, da la impresión que el solo hecho que yo solicite en el Pleno del Congreso, en pleno debate de la Ley de Presupuesto eso ya constituye delito; o, por ejemplo, emitir una resolución ministerial o no haber supervisado correctamente, pero para haber cometido esos delitos previamente hay que decir cuáles son los deberes incumplidos porque entiendo que eso se refiere al delito de omisión de funciones, va haber omisión de funciones en la medida que exista un deber que me exija a mi controlar eso, pero si no le exige a la ministra controlar eso, mal podemos hablar de omisión de funciones.

Entonces, Presidente, yo creo que las conclusiones debieran ser más concretas, generalmente las conclusiones son de tres, cuatro páginas, pero veo que acá realmente superan las cinco páginas, debe ser algo concreto. O sea, qué has determinado producto de tus antecedentes y de tus análisis es eso: uno, dos, tres, cuatro cinco.

Otro, por ejemplo, es que cuando se habla ya de responsabilidad penal hay que indicar precisamente cuáles son las personas en que habría incurrido en responsabilidad penal, solo se habla, por ejemplo, de la congresista Ana Jara, y acá se dice, por ejemplo, en uno de los puntos de las conclusiones que también habría incurrido en responsabilidad penal los funcionarios, pero no se detalla quiénes son esos funcionarios, simplemente hay una remisión. Entonces las conclusiones debieran decir quiénes son

esos funcionarios que habrían incurrido en responsabilidad penal por tales y cuales actos.

Entonces, vemos, Presidente, que de verdad este informe no resiste el mayor análisis, particularmente debería de ser desaprobado, ni siquiera para que sirva como insumo al Ministerio Público porque esto, finalmente, entiendo que va a terminar en el Ministerio Público, por qué, porque el Ministerio Público va a encontrar quiénes son las personas, qué se les está imputando, cuáles son las pruebas; o en todo caso cuáles son los indicios de comisión de delito pero eso no se desprende de este informe, Presidente.

Yo creo que aquí, Presidente, habido mucho relajó para efectuar este informe, yo creo que debió ser más exhaustivo, como le digo, en estas partes que tiene todo informe: antecedentes, análisis, conclusiones, sobre todo en el tema de las conclusiones porque es lo que justamente estoy consiguiendo. Entonces, de verdad que este informe ni siquiera serviría, por ejemplo, para imputar responsabilidad a los otros funcionarios.

Acá la congresista me recomienda que lo vote, que lo rompa, bueno, eso no me corresponde a mí, en todo caso será el pleno de la comisión quien decida sobre la suerte de este informe. Pero, Presidente, yo creo que acá, como digo, yo no le imputo a usted porque justamente usted no es abogado, pero yo creo que habría que tener un poco más control con los asesores que han hecho esto, porque de verdad yo como fiscal recibo esto, yo como fiscal que recibo esto digo: Pero qué dice, cuáles son las responsabilidades penales, cuáles son los indicios, y de verdad, Presidente, creo que dejaría mal puesto el nombre del Parlamento porque el Parlamento tiene esta facultad de investigación, pero investigaciones bien hechas ¿no? No para usar las palabras de la parlamentaria pero que no terminen pues en los anaqueles de la fiscalía, ¿no?

Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Realmente hay gente que no ayuda, ¿no?

Ya terminamos con el congresista Molina, y pasamos a la cuestión previa de Juan José Díaz Dios. Okay.

Congresista Agustín Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Me contenta de que de verdad la participación de todos los miembros de esta comisión de fiscalización, esté llegando a una conclusión, señor Presidente, en el sentido de que, efectivamente, creo que de acuerdo a la defensa del abogado, defensor de la congresista Ana Jara, y también de acuerdo a su defensa propia de ella misma, se concluye, señor Presidente, en que efectivamente estas supuestas imputaciones que se le viene realizando a la congresista no tiene sustento legal.

Se ha hecho una defensa técnico jurídico y demostrándose, señor Presidente, donde efectivamente no hay responsabilidad, lo único que existe, señor Presidente, es de que efectivamente el informe, el fondo del informe se quiere forzar la existencia de una responsabilidad penal de la cual no existe. Por esas razones, señor

Presidente, pido a su presidencia para que se vote la cuestión previa, excluyendo también a la petición del congresista Juan Díaz Dios, para que se le excluya a la congresista Ana Jara y Carmen Omonte y que se apruebe el informe para continuar con las investigaciones seguramente que se van a derivar al Ministerio Público como una recomendación.

Señor Presidente, pido que se vote esa cuestión previa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Da gusto escucharle, en todo caso en la línea que de algún modo a veces se va planteando en la mesa, y no como otras posiciones que a veces hay que discutir las.

Yo quiero solamente decir algo que es importante: Yo soy médico, no soy abogado, y si algo ayuda es que yo sí tengo la paciencia de saber escuchar para llegar a un buen diagnóstico. No me alienta hablar mal de nadie ni hacer el mal a nadie, y ratifico que yo no tengo ninguna animadversión, como diría la canción: esto me duele más a mí que a ti, y en ese sentido creo que es importante poner un poquito de eso.

Muy bien.

Congresista Becerril, y pasamos a la cuestión previa.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPPF).— Presidente, el colega Josué Gutiérrez me pide interrupción.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Gracias Héctor. Gracias, Presidente.

Solamente si en el lenguaje jurídico podríamos hablar, Presidente, hay que testar todo lo que imputa responsabilidad a la señora Ana Jara, a la señora Carmen Omonte, en los puntos tercero, séptimo y octavo, como también en los contenidos que sustentan esta apreciación en todo el informe.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPPF).— Gracias, Presidente.

En primer lugar, dejar en claro que esta comisión no está acusando ni a ningún ministro ni tampoco, Presidente, a ningún congresista, estamos simplemente poniendo de conocimiento en caso que así sea aceptado, aprobado este informe, poniendo de conocimiento del Ministerio Público lo que hemos podido encontrar.

Sacar el punto séptimo, Presidente, es sacar todo los implicados en el informe. Por qué digo esto, dice, séptimo: Se ha determinado la presunta existencia de indicios razonables de la comisión del delito de colusión agravada, malversación agravada y omisión de funciones por los hechos descritos anteriormente en el informe por parte de los funcionarios anteriormente mencionados en el capítulo anterior.

¿Y quiénes son los funcionarios mencionados en el capítulo anterior? Está la congresista Ana Jara Velásquez, está la señorita Elsa Estrella Cubillas Bueno, está el señor Marco Antonio Vallejo Castillo, está Nadia Samanta Carreño Egúsqüiza, Gabriel Fernando

Villa Nakamura, es decir, sacar este punto séptimo es, Presidente, librar a todos los funcionarios de esta investigación, de estos delitos, supuestos delitos de comisión agravada, malversación agravada y omisión de funciones.

Por tanto, Presidente, yo voy a ratificarme en que este informe tal y cual es debe ser aprobado por esta comisión y finalmente derivada al Ministerio Público.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muy bien.

Pasamos, entonces, a atender la cuestión previa del congresista Juan José Díaz Dios.

Yo me permitiría, congresista Mariano Portugal, para pasar a la cuestión previa que ha planteado el congresista Juan José Díaz Dios, y vamos después ya al tema de fondo.

Congresista Portugal.

El señor PORTUGAL CATAFORA (GPUR).— Presidente, en la sesión anterior yo he hecho notar que este tema de ninguna manera se puede archivar, pero que sí se debe excluir a quienes no tienen ninguna responsabilidad ni participación omisiva mucho menos la comisión de delito alguno, porque no somos la instancia para ver si se cometió o no se cometió.

Tampoco podríamos decir que hay indicios cuando, por ejemplo, ya los antecedentes vertidos por los diferentes congresistas y en especial del congresista Velásquez Quesquén, en nombre de la justicia estaríamos cometiendo una injusticia y eso no lo podemos permitir, yo creo que a cada quien hay que darle lo que le corresponde.

Presidente, en folio 108 de este pre informe, señalan que Ana Jara Velásquez, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dice: motivo y permitió se efectúe compra de pañales sin sustento de la necesidad de compra. Vamos a los siguientes folios y no encontramos de qué manera motivó, tampoco encontramos de qué manera permitió se efectúe la compra de pañales sin sustento de la necesidad de compra.

Si fuera así, estaríamos en un flagrante prácticamente sí, ahí sería delito porque ninguna ministra, ningún ministro es el que compra, para eso hay instancias administrativas, hay instancias, por ejemplo, la de abastecimiento, la Dirección General de Administración, etcétera, en todo caso no podemos hacer una aseveración si no tiene una prueba, un respaldo.

Me pide una interrupción el congresista Yehude Simon, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Interrupción, congresista Simon.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Sí, Presidente, para que quede bien, bien en claro. Nosotros, por lo menos yo le entendido a Juan de Dios, no estamos pidiendo que no se emita este informe al Ministerio Público, incluyendo a los dos congresistas, lo que estamos diciendo es que se elimine todo lo que está mal hecho, que significa cargarle a futuro cualquier responsabilidad sin saber que tiene responsabilidad y además porque este es contradictorio,

este informe cuando dice de que no se ha vulnerado ninguna norma, ninguna ley.

Lo digo esto, Presidente, porque se podría dar la imagen después de la intervención del congresista Becerril, de que estaríamos sacando a la congresista Ana Jara, Carmen Omonte y también a los funcionarios, eso no, eso debe quedar muy claro. El planteamiento por lo menos el del que habla es que este informe se corrija y que vaya al Ministerio Público con todas las personas en función a las responsabilidades que tienen y que han sido debidamente...hay evidencia de que hay corrupción. (11)

El señor PRESIDENTE.— Para culminar, congresista.

El señor PORTUGAL CATAORA (GPUR).— En ese sentido...

Una interrupción de la congresista Ana Jara, Presidente.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidente, ¿me permite la segunda interrupción?

El señor PRESIDENTE.— Segunda interrupción, congresista.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Gracias, Presidente.

Lo que pasa, Presidente, que decir que se elimina lo que está mal redactado tendríamos que eliminar todo este informe, me parece que es muy vaga la precisión que hace el congresista Yehude Simon, por lo menos en ese extremo.

A ver, en la conclusión n.º3, que yo sí ratifico lo que ha solicitado el congresista Josué Gutiérrez que se elimine esa conclusión, está expresamente dirigida a mí, porque dice: "La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana Jara Velásquez, no efectuó la supervisión de los procesos de contrataciones".

Entiéndase, no efectuó la supervisión de la licitación pública, por tanto, omitió funciones inherentes a su cargo. Dios mío, no les ha bastado todos los descargos que hasta la fecha he venido haciendo, no ha bastado las conclusiones de la Contraloría General de la República, no basta el dictamen del señor Fiscal de la Nación. O sea, yo puedo entender, y además ratifico y si pudiera votar que por ética no lo voy hacer, porque yo también tengo interés en los resultados de esta investigación, yo jamás podría retirar el nombre de ninguno de los funcionarios que está siendo objeto de investigación en sede de la Fiscalía Anticorrupción, porque en razón de la ley del Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su reglamento sí tienen competencias orgánicas o administrativas en estos temas.

O sea, la conclusión tercera está demás que esté aquí, no cabe una modificación, arreglar lo que está mal hecho, está mal hecho esto de principio a fin, y además, yo sabía que en la Comisión no me podía investigar a mí en condición de ministra de Estado y de congresista, pero aun así no me resistí porque yo también quería abonar para el esclarecimiento de los hechos, eso es una respuesta de carácter político que he tenido yo.

En la cláusula séptima, convengo con el congresista Héctor Becerril que suprimir esta conclusión séptima, liberaría a los funcionarios

del sector –por lo menos los que la Contraloría señala– tendrían algún grado de responsabilidad, la proporción de la responsabilidad, y si es administrativo o penal lo decidirán los operadores del Derecho, y en su caso la Contraloría General de la República que ya inició acciones sancionadoras, Presidente, me parece correcto, pero tendría, que como bien lo ha señalado sin ser notario el congresista Josué Gutiérrez, testarse, es decir, eliminarse, tenerse por no escrito la alusión que se refiere el capítulo anterior a mi nombre; y, por ende, corre la misma suerte la congresista Carmen Omonte.

Y en la conclusión octava, testarse, es decir, tenerse por no escrita la alusión que se hace a la exministra Carmen Omonte y a mí como exministra, porque por lo demás que se investigue cómo se invirtió, cuál fue la participación, cómo se invirtió el dinero, cuál fue la participación del comité especial, cuál fue la participación de los entes administrativos, me parece correcto, pero no el extremo donde se menciona mi nombre, porque si fuera así, entonces yo sí instaría a la comisión a no aceptar por completo este informe porque francamente si vamos a esa teoría que se elimine lo que está mal hecho, está mal hecho de principio a fin.

Gracias, colega Portugal, gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Segunda interrupción el congresista Simon.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, justamente es lo que hemos dicho, o sea, no estamos diciendo absolutamente nada diferente a lo que ha planteado la congresista Ana Jara, totalmente de acuerdo, lo que estoy diciendo es que la fiscalía tiene que continuar la investigación, que es una cosa diferente al informe de la comisión. Que quede claro, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Bien, vamos al voto.

Congresista Portugal, para finalizar.

El señor PORTUGAL CATAORA (GPUR).— Presidente, como decía, aquí pues no hay ninguna prueba pero sí hay aseveraciones contundentes.

En lo que respecta a la congresista Ana Jara Velásquez en el punto dos del folio 108, expresa que esta medida, como se ha dicho antes dice el informe, los efectos inmediatos de este hecho, o sea, la emisión de la Resolución Ministerial 137-2013, supusieron –dice– el inicio de toda la operativa pública contractual sin la cual esta no se hubiera producido. Supusieron dice.

Presidente, eso de decir supusieron, es prácticamente una duda en la que no nos dice que fue o no fue, hay que todavía decir "investiguen" porque nosotros lo que estamos investigando creemos, suponemos, o sea, estamos hablando de temas subjetivos. Nosotros tenemos que tener acá una investigación objetiva, contundente, con pruebas indubitables.

Es más, Presidente, dice en el tercer punto: "La intervención de la exministra Jara fue la conducta *sine qua non* no se hubiera producido finalmente el tracto colusorio agravado, ¿dónde están las pruebas de este tracto colusorio agravado? ¿Quién me puede explicar sobre un tracto colusorio agravado que no tiene ninguna

justificación de este tipo penal?, ¿en dónde está este tipo penal, el tracto colusorio agravado? dice, existe directa relación de causalidad bajo el imperio de la causa eficiente *sine qua non*; realmente todo esto nos hace ver que es una inclusión a la congresista Ana Jara, solamente para comprenderla en esta investigación.

Presidente, yo quisiera decirle que este informe respecto a la congresista Ana Jara, y lamento mucho que haya habido ministros que han sido prácticamente enjuiciados y siguen todavía con juicios hasta ahora, desde hace muchos años con estos pretextos, y el Congreso de la República no puede estar por encima de la inocencia de las personas, tampoco puede estar aseverando cuando hay subjetividades, de ninguna manera.

Si tenemos que hacer una investigación o hacer una denuncia que sea con respaldo objetivo, porque aquí está: se estaría, se supone, habría permitido, habría motivado.

En ese sentido, Presidente, yo creo que se debe optar por la exclusión en todo lo que se refiere a los o a las ministras que están comprometidos o se piensan que están comprometidas en este hecho, más bien conservando que este informe vaya a la investigación del Ministerio Público respecto de los funcionarios que sabremos si cometieron o no cometieron delitos, además, Presidente, aquí hay un sustento respecto de la exministra Ana Jara: La Contraloría no le ha encontrado responsabilidad alguna, el Ministerio Público ha archivado, ¿nosotros estamos por encima de ellos cuando el titular de la acción penal es el Ministerio Público?

En ese sentido, Presidente, yo reitero, como lo dije la semana anterior, que debe excluirse, no archivar, sino excluirse respecto al contenido de la ministra Ana Jara, y consecuentemente también de Carmen Omonte.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Bien, vamos a la votación de la cuestión previa.

El congresista Tapia me pidió una intervención, pero ¿quiere hacerla?, sino para no dilatar e ir al voto, al voto.

Gracias, congresista Tapia.

Congresista Díaz Dios.

Gracias, congresista Jara por su presencia.

Congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS ().— Presidente, solo para precisar entonces lo que sería el voto. Sería cuestión previa, solicitando se elimine toda mención de las exministras Ana Jara y Carmen Omonte del informe, con cargo a redacción, precisando, Presidente, que ese informe debería, tiene que ser aprobado y pasado al Ministerio Público para que continúen todas las investigaciones.

El señor PRESIDENTE.— Bien, entonces vamos al voto.

Quienes estén de acuerdo con la cuestión previa del congresista Juan José Díaz Dios.

Votación a mano alzada.

Congresista Heriberto Benítez, congresista Josué Gutiérrez, congresista Luis Galarreta, congresista Fredy Otárola, dándole la bienvenida también; congresista Santiago Gastañadui, congresista Agustín Molina, y congresista Molina por la congresista Jara. Congresista Mariano Portugal, congresista Solórzano, congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Disculpe, Presidente. Solamente para aclaración, porque yo quiero saber qué vamos a votar, Presidente.

Una cosa es que esto vaya al Ministerio Público y se saque del documento a la ministra en cuanto la responsabilidad que se da, pero eso no significa que se le excluya de que se envíe esto al Ministerio Público para que continúe la investigación.

El señor PRESIDENTE.— Votación final.

El señor SIMON MUNARO (PP).— No, eso tiene que quedar, claro, Presidente, o sea, ... que se precise así, si se precisa así, Presidente, estoy de acuerdo.

El señor PRESIDENTE.— Sí, es el coincidente con el del congresista...Estamos ahora en la cuestión previa y después vamos a voto final ya del informe, entonces la cuestión previa.

Congresista Juan José Díaz Dios, a favor; congresista Yehude, a favor. Los congresistas que se abstengan. Congresistas en contra. El congresista Tapia, Becerril, Beteta y Saavedra. Velásquez, a favor; congresista Aguinaga, a favor.

Bien, ha sido aprobada la cuestión previa.

Vamos, ahora, sin eso ya de la cuestión previa, vamos nosotros a proceder a la votación del informe final.

Correcto, yo espero que estén atentos, esta es como una operación de alta cirugía y en la que hay que estar atentos.

Bien, resultado de la votación. Nueve a favor, cuatro en contra.

Dos, tres.

A ver. Los que están en contra, el congresista Becerril, congresista Tapia, congresista Beteta. No, ha votado a favor, Aguinaga, y congresista Saavedra.

Muy bien, vamos a ahora a la votación del informe final sin esta consideración.

Quienes estén de acuerdo con el informe final, donde sí hay funcionarios comprometidos dentro del informe sírvanse levantar la mano.

A favor, Javier Velásquez; Heriberto Benítez, Mariano Portugal, Fredy Otárola, Santiago Gastañadui, Juan José Díaz Dios, congresista Aguinaga, Congresista Gutiérrez, congresista Agustín Molina,...

El señor DÍAZ DIOS ().— Aguinaga no.

El señor PRESIDENTE.— No vota. Congresista Galarreta, congresista Yehude Simon, congresista Solórzano. Quienes se abstengan, quienes

estén en contra. Abstención, Aguinaga, Becerril, Tapia, Beteta. ¿Alguien en contra? Nadie. Abstención, Cordero.

Congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPPF).— Presidente, para dejar en Actas que estamos votando en abstención, Presidente, porque no estamos de acuerdo que se excluya a las ministras de este informe. Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Becerril.

Ha sido aprobado el informe por mayoría.

Pasamos al último punto.

Quisiera pedirle al congresista Benítez, que sustente el pedido que ha hecho.

Ah, un momento, por favor.

Quiero, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados hasta este momento sin esperar el trámite de aprobación del Acta.

¿A favor? Por unanimidad.

La dispensa de aprobación del Acta ha sido aprobada.

Congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Gracias, señor Presidente.

Quiero señalar, señor Presidente, que se ha hecho un pedido para que se invite a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para que venga al Congreso de la República a dar explicaciones respecto a la situación irregular, comprometedor y sospechosa que tiene el secretario general de su organización política, y que estaría ligada a probables delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La representante legal y la jefa del partido Fuerza Popular, según sus estatutos es la señora Keiko Fujimori, ella es candidata presidencial, aspira a ocupar la primera magistratura, pero sin embargo tiene en su entorno a personas que están seriamente cuestionadas e investigadas en el Perú, tanto por la Procuraduría de Lavado de Activos como por el Ministerio Público.

Esa persona que está investigada no solo está permanentemente al lado derecho de la candidata Keiko Fujimori, sino que además es presidente del Comité de Disciplina de su partido, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, es una de las personas que financian la campaña aporta inmuebles, aporta vehículos, se reúne con propietarios de agencias o empresas de encuestas y es el brazo político de la señora Keiko Fujimori. (12)

En los últimos días, señor Presidente, la señora Fujimori ha dicho que como ya hay un informe de la DEA donde no menciona su nombre, ya no debería considerársele en nada. Y el señor Ramírez ha dicho que como cuando el compró dos inmuebles en Miami, el Banco ya evaluó su condición, y como no tiene absolutamente nada, por eso le aprobaron los créditos. Sin embargo, señor Presidente, basta hacer un poco de memoria y recordar el caso de Fernando Zevallos,

el señor Zevallos también decía que la DEA no lo investigaba, el señor Zevallos vivía en Estados Unidos, trabajaba en Estados Unidos, tenía residencia en Estados Unidos, tenía patrimonio en Estados Unidos y, sin embargo, mirenen cómo terminó, en la cárcel, condenado a prisión por narcotráfico.

Así que, señor Presidente, el hecho de que en la DEA no figure un nombre no excluye que el Congreso de la República pueda hacer una investigación. El hecho de que la DEA diga que a tal persona no se le investiga, no quiere decir que no hayan sospechas o indicios de haberse cometido un delito.

Acá en el Perú, señor Presidente, nosotros por la transparencia, por la democracia y por la lucha contra el narcotráfico tenemos que citar a las personas para que aclaren la situación.

Aquí no estamos condenando ni pidiendo que se le procese a nadie, estamos empezando el debido proceso pidiendo que se le cite a la señora Keiko Fujimori como Jefa del Partido Fuerza Popular para que venga a explicar esta situación, porque en realidad es un tema muy delicado, estamos hablando del lavado de activos, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de bienes millonarios de una persona que incluso pretende burlarse de los peruanos diciendo que con humildad empezó siendo un cobrador de combi y al poco tiempo termina siendo un prestigioso empresario. Probablemente habrá trabajado en la empresa El Chosicano o en alguna conocida de esa naturaleza para poder obtener en poco tiempo tanto dinero, señor Presidente.

Por esa razón, señor Presidente, considero que lo mínimo que puede hacer esta Comisión de Fiscalización es invitar a la señora Keiko Fujimori...

(Diálogo ininteligible)

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, por favor, para que termine.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, para poder continuar le pediría que usted ponga un poco de orden.

El señor PRESIDENTE.— Sí, lo estamos haciendo, congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Sería bueno que los hoy militantes de Fuerza Popular escuchen lo que se está diciendo, porque son ellos los que respaldan esa organización y son ellos los que integran ese grupo político, señor Presidente.

Hay algunos que se han subido al carro solo para seguir en el Congreso y hay otros que ya no saben qué hacer por un puesto público, y eso da pena y da vergüenza. Aquí nosotros tenemos la obligación de invitar a una persona para que venga a explicar qué vínculos hay con el lavado de activos y el narcotráfico.

Aquí hay indicios y elementos suficientes para investigar con el crecimiento inmobiliario y empresarial de una persona que hoy ocupa el segundo cargo en importancia de un partido político.

Aquí se han hecho investigaciones en el Congreso sobre la narcopolítica y los partidos que se han infiltrado por narcotráfico

y por lavado de activos y aquí no se puede cerrar la puerta a nadie, al contrario, hay que citarlos y escucharlos, ver su versión y de acuerdo a eso tomar una decisión, señor Presidente.

Por esa razón, considero que no solo es que la DEA lo ha archivado, no solo es que no se menciona un nombre, no solo es que se compraron dos inmuebles, sino que hay suficientes elementos que permiten invitar a la representante legal y a la Jefa del Partido Político Fuerza Popular a que venga a dar las explicaciones del caso, más aún cuando se aspira a ocupar la Primera Magistratura de la nación, más aún cuando se es aspirante a la Presidencia de la República, señor Presidente.

Por esa razón, yo reitero mi pedido para que se pueda invitar a la señora Keiko Fujimori a la Comisión de Fiscalización, y sobre todo teniendo en cuenta...

Señor Presidente, yo le pediría que ponga orden.

Yo entiendo que hay congresistas que no les interesa el tema del narcotráfico porque de repente están aliados o están en complicidad, pero hay otros y el Perú sí quiere saber por qué se investigan los casos de narcotráfico.

El señor SPADARO PHILIPPS (GFPF).— Señor Presidente, el señor cuestionado... (falla de grabación)... en todo caso que venga el INPE y se lo lleve de una vez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— A ver, congresistas, yo no quiero a esta altura de una sesión, que realmente...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Ponga orden, señor Presidente.

(Diálogo ininteligible).

El señor PRESIDENTE.— Por favor, les pediría que no entren [...?].

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— El narcotráfico se infiltra en la política.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— (Intervención fuera del micrófono).

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, al señor Galarreta le pido un poco más de respeto.

Señor Presidente, ponga usted orden, porque hay políticos que realmente dan vergüenza, después de ser críticos del fujimorismo hoy día abrazan la fujicracia y están ahí por un puesto público. Qué pena, qué lamentable, qué triste para el Perú estos personajes que ahora se alían al lavado de activos y al narcotráfico.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez, por favor, era el sustento del pedido de usted, creo que habría que...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, es que hay que poner orden porque quieren demostrar indiferencia.

El señor PRESIDENTE.— Y lo estamos haciendo.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Si hoy día se portan así, cómo será cuando tengan 70 congresistas.

El señor .— Señor Presidente, si ya acabó al voto.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez, entonces creo que vamos al voto.

Si alguien quiere intervenir, si no, al voto.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, o sea, acá uno no puede hablar.

El señor PRESIDENTE.— Está usted en todo su derecho, pero lo que le pido es que se centre en el pedido que ha hecho...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Pero estamos entrando, estamos hablando del narcotráfico, del lavado de activos, de una candidata presidencial, de un partido político que sus seguidores no quieren escuchar.

El señor PRESIDENTE.— Yo creo que aquí todos los congresistas saben del tema, creo todos los que estamos en la mesa saben, si algo más tiene usted para que pasemos o bien al voto o a la discusión, por favor.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPPF).— Voy a llamar al Inpe.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— señor Presidente, creo, como dice el señor Spadaro, que hay que llamar al Inpe, pero ya sabemos para llevar a quién, para llevarlo a la Dinos, para que estén ahí en la cárcel.

El señor PRESIDENTE.— Por favor, le pido...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, usted me corta...

El señor PRESIDENTE.— Pero por eso, le pido que no estemos refiriendo para no estar tampoco con la...

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, yo no entiendo por qué hay tanto miedo cuando se habla de narcotráfico, cuando se habla del lavado de activos, cuando se habla de Keiko Fujimori, cuando se habla de su secretario general, cuando se habla de los bienes que aparecen sospechosamente, cuando se habla de propiedades que no se pueden justificar, declaraciones juradas que no se entregan a tiempo, que se omiten ante la Contraloría, ante...

El señor PRESIDENTE.— Congresista, ya, creo que ahora prácticamente vamos al voto.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, ¿a usted le molesta que hable de este tema?

El señor PRESIDENTE.— No, sino yo creo que el respeto hay que guardárselo para con todos.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Pero hay que repetirlo para que quede grabado.

Señor Presidente, parece que usted se hubiera puesto un kimono, pareciera.

(Diálogo ininteligible).

El señor .— Con eso léele el reglamento, ya se pasó. Léele el reglamento.

El señor PRESIDENTE.— Mire, yo soy lo suficientemente tolerante, prudente, ponderado y creo que por eso, como le digo, como

presidente igual yo estoy permitiéndole hablar y yo le pido que por respeto al país, a la comisión, por favor, culmine para pasar al voto y dejemos este espinoso tema.

El señor BENÍTEZ RIVAS ().— Señor Presidente, el mejor respeto al país sería, como dijo la propia señora Keiko Fujimori, que no blindan a nadie, que el estatuto de su partido no permite blindaje, entonces, déjenla venir a Keiko Fujimori, que dé el ejemplo viniendo al Congreso, esclareciendo los temas vinculados al lavado de activos, al narcotráfico y al entorno de las personas que están financiando su campaña, porque sería peligrosísimo para el Perú que alguien solventado por el narcotráfico llegue a la Primera Magistratura, y eso es lo que tenemos que aclarar acá.

A ver, pues, que cumplan su estatuto, que cumplan lo que dice su jefa, que dejen que la jefa de Fuerza Popular venga aquí al Congreso a explicar y se dejen de insultar, porque el Perú quiere saber si hay o no vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Vamos al voto.

Me ha pedido el congresista Yehude Simon para que intervenga y vamos al voto.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Gracias, señor Presidente, yo no voy a llegar a acusar a nadie, pero ciertamente ha habido un informe de dos medios de comunicación o tres medios de comunicación que han producido un terremoto, verdad o mentira pero han producido un terremoto.

No creo, señor Presidente, que debamos invitar a la señora Keiko Fujimori, o sea, en la medida que a ella no la han acusado no tendría ningún sentido hacerlo, pero sí creo, después de haber escuchado la intervención el día de ayer del congresista Joaquín Ramírez, que él está dispuesto a toda investigación, que está dispuesto a hablar. Entonces, creo que por el bien del propio partido, que está postulando a la presidencia de la República, debería invitarse al señor Joaquín Ramírez para que pueda aclarar, porque sí es cierto que la comisión de narcotráfico investigó y prefirió no meterse en temas que ya estaban siendo investigados tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía, y se mencionaba algunos nombres de algunos congresistas, que dijimos: en la medida que no se pueda investigar, dejemos que el trabajo lo haga quien corresponde.

Yo lo que le digo, señor Presidente, aquí no se está jugando poca cosa, porque aquí incluso se ha hablado de medios de comunicación que han actuado promocionando una candidatura, o sea, se ha perdido el sentido de la información, se ha atacado a dos canales de televisión, a un medio periodístico, lo cual no es correcto.

Entonces, mi posición, señor Presidente, es, la señora Keiko Fujimori no tiene por qué venir porque no ha sido mencionada y la DEA ha dicho con mucha claridad que no está investigada, pero sí se ha mencionado el nombre de Joaquín Ramírez, nuestro candidato...

No, pero sí lo ha dicho, ha salido en medios de comunicación y sí lo ha dicho la procuradora Príncipe en algún momento.

En todo caso, señor Presidente, sin insultos, sin calificativos, sin señalamientos, mi posición es que se pueda invitar al señor Joaquín Ramírez para que pueda aclarar lo que ha sido publicado como sucedió con el presidente Toledo, como sucedió con el presidente García, como han sucedido las comisiones investigadoras de Lava Jato, etcétera.

En este país, señor Presidente, hay que ser transparente, no solamente decirlo, sino hay que practicarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Perfecto.

El congresista Fredy Otárola y congresista Díaz Dios.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Señor Presidente, voy a ser muy breve.

Yo soy provinciano, mis padres son de Huaraz, mi madre de Chacas, un hermoso pueblito sobre los 3300 metros de altura atravesando el Huascarán y me siento orgulloso de ser serrano y me parece poco decente utilizar ese argumento para victimizarse.

Para nosotros es un orgullo, no nos sentimos marginados en el Perú, nunca se nos ha atacado por la condición de serranos. Entonces, permítame solo en ese punto hacer llegar mi preocupación y mi indignación.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Otárola.

Al voto.

Vamos al voto.

Quienes estén...

El señor SIMON MUNARO (PP).— Son dos votaciones.

El señor PRESIDENTE.— Qué votaciones.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Una la invitación a la señora Keiko y otro a Joaquín, o sea, son dos personas diferentes.

(Diálogo ininteligible).

El señor SIMON MUNARO (PP).— Entonces, yo estoy pidiendo que se invite al señor Joaquín.

El señor PRESIDENTE.— Bien.

Vamos a votar el pedido del congresista Heriberto Benítez.

Quienes estén porque se le cite a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Al voto.

Quienes estén a favor. Congresistas Gastañadui, Otárola, Rivas y Solórzano. ¿Usted no vota? Ya. Congresistas Solórzano, Heriberto Benítez, y nadie más.

Quienes estén en contra de que venga la señora Keiko Sofía. Congresistas Velásquez, Galarreta, Saavedra, Cordero, Díaz Dios, Yehude Simon, Tapia, Becerril, Beteta, y ahí quedaríamos. Congresista Aguinaga. En todo caso el pedido no ha prosperado.

Está bien, sí, perfecto, son cinco los votos nomás que se contabiliza de la Bancada Fuerza Popular.

Abstenciones. En Contra. Ya estaba en contra. Rechazado el pedido del congresista Benítez.

Vamos al pedido.

Congresista Simon.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Señor Presidente, yo lo que estoy pidiendo es que le inviten para que pueda aclarar las denuncias hechas por los medios de comunicación. Mi propuesta es que venga a la comisión.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Permítame, señor Presidente, no estamos jugando a la política, entendemos que la población está polarizada. Hay medios de comunicación muy serios que antes han hecho otras denuncias y esta comisión con la sola denuncia ha convocado a congresistas, a expresidentes de la República, etcétera.

Convocar, la Comisión Lava Jato ha convocado a congresistas, a querido levantar el secreto bancario...

Permítame. Sí, te voy a dar la interrupción.

Señor Presidente, por la salud del Congreso, por la salud de la clase política, lo que estoy planteando es que se invite al congresista.

Vamos a la votación y si usted no cree conveniente, simplemente no lo cree, pero se ha hablado, se ha difamado incluso a algunos medios de comunicación diciendo que esta campaña es producto de una simpatía por algún candidato a la presidencia, lo cual no me parece correcto.

El señor PRESIDENTE.— Vamos al voto. (13)

Congresista Aguinaga, puede hacer uso de la palabra.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Señor Presidente, yo le pediría que, por favor, revisen el reglamento, los congresistas no van a las comisiones regulares, van a la Comisión de Ética...

Le concedo la interrupción al congresista Juan José Díaz Dios.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Díaz Dios, puede hacer uso de la interrupción.

El señor DÍAZ DIOS ().— Gracias, señor Presidente; gracias, congresista Aguinaga, por eso le estaba pidiendo la interrupción al congresista Yehude Simon.

Lo dijimos hace un momento en la votación referido a la congresista Carmen Omonte y Ana Jara. Esta comisión no tiene facultades, en realidad lo que plantearíamos es una cuestión de orden, en este caso la invitación sería cuando un congresista es testigo de algo,

pero en este caso sería el personaje central y para esto esta comisión no tiene facultades, o lo investigaría en supuesto la Comisión de Ética o Acusaciones Constitucionales y de eso no solamente está el Reglamento sino informes, como el 008-2008, de la Comisión de Constitución, precisamente, y reitero, lo acabamos de plantear nosotros como argumento para el retiro de las congresistas Ana Jara y Carmen Omonte también.

Yo le pediría al congresista Aguinaga que lo plantee como cuestión de orden, más bien, ya que estaríamos yendo en contra del Reglamento del Congreso.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Aguinaga.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GFPF).— Y además, señor Presidente, cuando el órgano jurisdiccional se aboca a la investigación, nuestra situación, nuestra posición, ya queda descolocada y entiendo que este caso está en el Ministerio Público.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Yehude Simon, tiene el uso de la palabra.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Yo he manifestado mi posición, señor Presidente, pero en todo caso yo le pido que para la próxima sesión se convoque al Procurador de Lavado de Activos para poder hacer la investigación respectiva.

El señor PRESIDENTE.— Bien, en todo caso haremos la invitación, quedaría sin efecto, en todo caso, este pedido...

El señor SIMON MUNARO (PP).— No, es que se vote, señor Presidente, y después quedaríamos...

El señor PRESIDENTE.— Pero es una cuestión de orden.

El señor SIMON MUNARO (PP).— En todo caso, señor Presidente, que quede mi pedido y que se invite al Procurador de Lavado de Activos.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Díaz Dios, puede hacer uso de la palabra.

El señor DÍAZ DIOS ().— Señor Presidente, lo que decíamos como cuestión de orden es que no se puede invitar, se invita en el marco de una investigación que sería precisamente un parlamentario y eso está fuera de nuestras competencias como Comisión de Fiscalización, sería un pedido que va en contra del Reglamento del Congreso y por eso no puede ser sujeto a votación.

Le pediría, a través suyo, al congresista Yehude Simon, con mucho respeto, pueda reconsiderar esta solicitud, a efecto de no votar algo que no se puede aprobar.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Señor Presidente, en todo caso lo que me interesa a mí como le interesa a los 30 millones de peruanos, es que estos casos se esclarezcan.

Yo no voy a poner trabas para evitar una investigación, sino se puede invitar, de acuerdo al Reglamento, que a mí me parece correcto. Sin embargo planteo que venga el Procurador de Lavado de Activos, para que venga en la próxima sesión de la Comisión de Fiscalización.

El señor PRESIDENTE.— Muy bien.

Muchas gracias, señores congresistas...

El señor SIMON MUNARO (PP).— Perdón, señor Presidente, que se vote eso, que se vote la presencia del Procurador.

El señor PRESIDENTE.— Creo que podemos evitar, lo vamos a invitar a tu pedido.

Señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite del Acta. La dispensa ha sido aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 59 minutos, del día miércoles 18 de mayo de 2016, período anual de sesiones 2015-2016 de la Comisión de Fiscalización.

Agradezco a todos y cada uno de los seres humanos que conforman la comisión y que han estado presentes el día de hoy en la vigésima sesión.

—A las 12:59 h, se levanta la sesión.